**EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD RURAL COMO FACTOR DETERMINANTE EN
LA CONCENTRACIÓN DE TIERRA. ESTUDIO DE CASO: NORTE DEL VALLE
DEL CAUCA (PERIODO: 1990-2005)**

JUAN SEBASTIÁN PRIETO MERCHÁN

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
BOGOTÁ D.C., 2015**

“El régimen de propiedad rural como factor determinante en la concentración de tierra.
Estudio de caso: norte del Valle del Cauca (Periodo: 1990-2005)”

Estudio de Caso
Presentada como requisito para optar por el título de
Politólogo
En la Facultad de Ciencia Política y Gobierno
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por:
Juan Sebastián Prieto Merchán

Dirigido por:
Rocío del Pilar Peña Huertas

Semestre I, 2015

No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.

Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.

Para todos la luz.

Para todos todo.

Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta.

Para nosotros nada.

Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz.

Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994.

Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años.

Estas son, hoy, nuestras exigencias.

IV Declaración de la Selva Lacandona

1ro de Enero 1996

AGRADECIMIENTOS

Para mayor exactitud y veracidad en mis palabras es sensato agradecer a María Hilda Merchán, Víctor Manuel Prieto y Rosa Elvira Merchán. Humildes seres, como pocos, de sencillos placeres pero de palabras ciertas y convicciones valederas.

Mis más sinceros agradecimientos al Observatorio de Restitución de Tierras y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

RESUMEN

El objetivo de este estudio de caso es identificar las variables institucionales y normativas que permitieron el aumento de la concentración de tierra en el norte del Valle del Cauca, a partir del despojo sistemático de tierras durante 1990 y 2005. El presente trabajo muestra las implicaciones sociales y económicas impuestas desde el escenario de violencia en un área regional. La debilidad del Estado colombiano y el funcionamiento de sus instituciones terminan por configurarse como factores determinantes en la estrategia militar de los cuerpos alzados en armas. Se pretende brindar una visión local que permita reconocer la complejidad y la variedad en las dinámicas de concentración de tierras.

Palabras Clave

Concentración de tierra; Despojo; Abandono; Víctimas; Valle del Cauca.

ABSTRACT

The objective of this case study is to identify institutional and policy variables that allowed the increase of the land concentration at the Valle del Cauca's north caused by the land systematic dispossession during the time: 1990 to 2005. This work presents the economic and social implications imposed by the violence scene in a regional area. The Colombian State weakness and functioning of its institutions configured the determining factors used by the rebel's military strategy. It is intended to provide a local vision to recognize the complexity and variety in the dynamics of land concentration.

Key Words:

Land concentration; Dispossession; Abandonment ;Victims; Valle del Cauca.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	11
1. FALLAS INSTITUCIONALES EN LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA	15
1.1. Análisis del régimen de propiedad rural desde una perspectiva institucionalista	15
1.3. Procesos de formalización para la propiedad rural	17
1.2. Marco normativo y diseño institucional del Régimen de Propiedad Rural entre 1990 v 2005	20
1.4. Ambigüedad en el régimen de propiedad rural	23
2. DETERMINAR LOS MODOS DE DESPOJO USADOS EN EL VALLE DEL CAUCA, DURANTE 1990 Y 2005	27
2.1. Conceptos de Despojo y Abandono	27
2.2. Escenario de violencia y despojo en el Valle del Cauca	28
2.3. Acción paramilitar: las masacres y el despojo sistemático como herramientas de intimidación y control social	30

2.4. Conflicto armado y la actividad de los grupos guerrilleros	35
2.5. Posicionamiento del narcotráfico en las dinámicas de despojo y abandono	36
2.6. La condición de víctima y la afectación patrimonial	39
3. DINÁMICAS DE CONCENTRACIÓN DE TIERRA EN EL VALLE DEL CAUCA	44
3.1. Tendencias de concentración y derechos de propiedad	44
3.2. Estructura de la propiedad agraria	46
3.3. Transformación en el uso de la tierra en el Norte del Valle del Cauca	49
CONCLUSIONES	55
BIBLIOGRAFIA.	
ANEXO.	

LISTA DE GRAFICOS Y TABLAS

	pág.
Tabla No 1. Estructura de Propiedad en Trujillo 1993.	51
Tabla No 2. Distribución del Uso de la Tierra en Trujillo.	53

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1. Condiciones de Formalidad e informalidad. Noción y sustento Jurídico. (Elaborado por el autor en base a información dada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).
- Anexo 2. Cuadros de Análisis de Condición de víctimas y sus predios. (Cuadro realizado por el Autor en base a las sentencias de restitución de tierras).
- Anexo 3 Cuadro de Revisión de Noticias. (Elaborado por el autor en base a diferentes fuentes periodísticas nacionales y regionales).

LISTA DE SIGLAS

IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
SNR	Súper Intendencia de Notariado Y Registro.
INCODER	Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural.
ORIP	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias
ELN	Ejército de Liberación Nacional
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
BACRIM	Bandas Criminales
UAF	Unidad Agrícola Familiar
RUPTA	Registro Único de Predios y Territorios Abonados por la Violencia
INAT	Instituto Nacional de Adecuación de Tierras
DRI	Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural
INPA	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura
UMATA	Unidades Municipales de Asistencia Técnica

INTRODUCCIÓN

El presente estudio de caso examina la incidencia de las instituciones públicas en el desarrollo del conflicto armado. En esta medida el objetivo central es identificar las variables institucionales y normativas que permitieron el aumento de la concentración de tierra en el Valle del Cauca, a partir del despojo sistemático de tierras entre 1990 y 2005.

La investigación hace parte del interés renovado, no solamente desde la academia sino desde los círculos de debate de la opinión pública, sobre temas de reforma y política agraria. Se da continuidad a una serie de trabajos desarrollados bajo un enfoque institucionalista que analizan las realidades del conflicto en el campo colombiano a nivel regional.

Teniendo como punto de partida el objetivo central se han planteado los siguientes objetivos específicos : i) determinar la ambigüedad presente en los procedimientos de formalización de propiedad e identificar los organismos correspondientes ante los cuales se desarrollan estas actividades en el ámbito rural; ii) exponer los modos de despojo usados en el Valle del Cauca, durante el periodo de tiempo de 1990 a 2005; iii) examinar las dinámicas de concentración de tierra en el Valle del Cauca.

Es prudente advertir que se realiza un análisis cualitativo de carácter descriptivo e histórico. Desde el formato metodológico propio del estudio de caso la labor investigativa se centró en explicar y describir la dinámica de funcionamiento del régimen de propiedad rural, y su relación con el despojo sistemático que ha provocado un cambio en el uso de la tierra.

Teniendo en cuenta la pregunta central: ¿Cuáles son las variables institucionales y normativas que permitieron el aumento de la concentración de tierra en el Valle del Cauca a partir del despojo sistemático de tierras durante 1990 y 2005? Se mantiene la hipótesis que la ambigüedad presente en los procesos legales del régimen de propiedad rural facilitó el despojo sistemático de tierras en el Valle del Cauca durante 1990 y 2005. Los sistemas institucionales bajo los cuales se legalizan los derechos de propiedad han hecho parte de la estrategia de los grupos alzados en armas para apropiarse de grandes extensiones de tierras. Los proyectos agro industriales se han alimentado de estas irregularidades en el mercado de tierras.

Respecto al proyecto de investigación el presente trabajo muestra evidentes cambios sobre la hipótesis y el espacio geográfico planteado. Si bien al momento de formular la hipótesis se consideró la influencia de los proyectos agro industriales, en el trabajo definitivo se corroboró que tal influencia varía según la región. Considerando la zona noroccidental del departamento del Valle del Cauca el conflicto armado ha terminado por impedir la puesta en marcha de proyectos productivos a gran escala. Lo anterior también conllevó a la reforma de uno de los objetivos específicos sin que se transformara su importancia, el análisis de las tendencias de concentración.

En virtud de una mayor precisión metodológica y una mejor relación entre las variables de conflicto y territorio se delimitó el análisis a la zona noroccidental del Valle del Cauca. Esto responde a limitaciones existentes en cuanto a la información y, adicionalmente, a la dinámica de conflicto existente en la zona.

La selección del Valle del Cauca y de la zona noroccidental como escenario de investigación obedece a los altos índices de concentración y al recrudecimiento de las acciones armadas. El departamento presenta una concentración de tierra cercana al 0,91, siendo uno de los departamentos con mayor desigualdad respecto de la propiedad rural, siguiendo el índice de concentración del coeficiente de Gini, resaltando que el 64,3% de los predios registrados se encuentran en posesión del 5 % de los propietarios. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC] 2012)

La región noroccidental del Valle del Cauca se compone por tres municipios: Bolívar, Riofrio y Trujillo; siendo una zona montañosa y con una ubicación estratégicamente importante en el tráfico de estupefacientes. La caída del Cartel del Valle generó una intensificación de los enfrentamientos armados entre capos de la mafia presentes en la zona, tales como: Wilber Varela, alias “Jabón”, Diego Montoya, alias “Don Diego” y Henry Loaiza, alias “Alacrán”. A esto se suma la entrada de los paramilitares y las acciones de los grupos guerrilleros.

La demarcación temporal del estudio obedece a dos criterios: primero, se evidencia que los fenómenos de violencia y despojo se intensifican en la década de los 90. Además, en el año 1990 tienen lugar los primeros asesinatos que han sido reconocidos como parte de la Masacre de Trujillo. Segundo, en 2005 se expide la ley 975, de justicia y paz, que establece el marco jurídico para el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares,

principales perpetradores de masacres y despojos. (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] 2014)

El trabajo está estructurado en tres capítulos, vinculados a los objetivos específicos: primero, se desarrollan las nociones conceptuales y teóricas relacionadas con el régimen de propiedad. Se da una plataforma institucional que involucra escenarios económicos y políticos.

El segundo capítulo contiene un recuento de las dinámicas de despojo y abandono en el noroccidente del Valle del Cauca, resaltando el contexto del conflicto y el papel de los distintos actores armados. A partir de la consulta de fuentes primarias, como son 38 sentencias de restitución de tierras pertenecientes a la región. De igual manera se tiene en cuenta el cubrimiento periodístico de medios regionales y nacionales a los hechos de violencia.

En el tercer capítulo se analiza la variación en la estructura de la tenencia de la tierra. Se examina la evolución de las condiciones de concentración dentro del periodo de tiempo tenido en cuenta y se muestran las transformaciones causadas en el uso de la tierra.

La importancia de este trabajo es el aporte a la configuración de categorías analíticas apropiadas para los diferentes procesos de restitución a víctimas que actualmente se están llevando a cabo en el país. El Estado colombiano con la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011 ha establecido un proceso, que vincula entidades jurídicas y administrativas, con el fin de que las víctimas no solamente regresen a las tierras que le han sido arrebatadas sino que tengan mejores condiciones de vida.

La incapacidad del Estado por consolidar una reforma agraria ha terminado por contribuir al escenario de pobreza y violencia. Así como lo afirmaron los líderes de las FARC al comenzar los diálogos de paz la concentración de tierras y la desigualdad frente a los medios de producción ha terminado por socavar la esperanza de miles de campesinos a lo largo del país. Colombia es reconocida como uno de los países con mayor índice de concentración de tierra a nivel mundial, actualmente el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra. (IGAC 2012)

El proceso de concentración se ha intensificado a partir de la subutilización de la tierra con vocación agrícola. La superficie dedicada a actividades agrícolas y silviagrícolas asciende a 4,9 millones de hectáreas, aunque se estima que 21,5 millones tienen aptitud

agrícola, es decir sólo el 22,7% de la superficie con vocación agrícola es utilizada para el establecimiento de cultivos. (Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia [OIDHACO] 2013)

Se espera que el estudio de caso propuesto sirva para la comprensión del conflicto colombiano como un fenómeno multidimensional, y para el análisis de las instituciones públicas como entes de vital importancia en la distribución territorial de los predios rurales.

1. FALLAS INSTITUCIONALES EN LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA

Para comprender el aparato institucional que rodea el régimen de propiedad es prudente identificar una serie de criterios que faciliten el análisis, luego es necesario establecer de manera orgánica y funcional el diseño institucional. De esta manera se pretende determinar las fallas y ambigüedades presentes en el régimen de propiedad.

1.1. Análisis del régimen de propiedad rural desde una perspectiva institucionalista

La influencia del régimen de propiedad rural sobre los fenómenos de concentración y despojo se analiza desde una perspectiva institucionalista. Así pues, en este capítulo se pretende profundizar en dos dimensiones: el marco normativo y la estructura orgánica del régimen de propiedad.

Para empezar, las instituciones se entienden como el conjunto de reglas que organizan y articulan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales, y están diseñadas para restringir el comportamiento de los individuos y así maximizar la riqueza y utilidad (North 1990). Se consideran tres características esenciales propias de las instituciones: primero, que son un rasgo estructural de la sociedad y pueden ser tanto formales como informales; segundo, su estabilidad en el tiempo y, tercero, que afectan el comportamiento de sus miembros, pues tienen la capacidad de restringir las decisiones de los individuos.¹

En lo que respecta a este trabajo, el régimen de propiedad rural se configura como una institución que soporta la adquisición de la propiedad de un bien inmueble ubicado en zonas rurales, a manos de una persona natural o jurídica. La adquisición se afirma al consolidarse el derecho real de usar, gozar y disponer de los bienes de manera legítima. En este sentido, al hablar de proceso de formalización nos referimos al trámite legal para el registro y saneamiento de los títulos de propiedad incluyendo los procesos de catastro

¹ Siguiendo a Guy Peters (1999), en su texto *El Nuevo Institucionalismo, la Teoría Institucional en Ciencia Política*. El nuevo institucionalismo tiene en cuenta una multiplicidad de disciplinas científicas, tales como la economía, sociología y la psicología, útiles en la investigación, así pues se considera un progreso metodológico y teórico.

rural y la inscripción de escrituras, con el fin de que sea reconocido el derecho de dominio sobre un predio.

Siguiendo a Dieter Nohlen (2003) y con el fin de generar una aproximación más exacta a la condición de ambigüedad en el régimen de propiedad, partimos de cuatro categorías para la observación de los diseños institucionales: Participación, estabilidad, efectividad y legitimidad.

Es necesario desagregar las cuatro categorías de análisis ya mencionadas: **i)** Al hablar de participación debemos considerar que Nohlen aboga por el desarrollo de instituciones que se involucren de manera directa con las necesidades de los ciudadanos, lo cual implica la ampliación democrática de las instituciones públicas. Para el presente estudio de caso, tal involucramiento será examinado desde la capacidad de acceso que tienen los ciudadanos a las instituciones que componen el régimen de propiedad rural.

ii) Para referirnos a la estabilidad se resaltaré la frecuencia con que los mecanismos descritos son reformados, además de los procesos y funciones que deben cumplir. El servicio público logra consolidarse en la medida que los parámetros de funcionamiento son claros y se vinculan bajo un criterio único.

iii) La efectividad como un parámetro a evaluar de las instituciones se vincula con figuras elementales como la agilidad y facilidad para realizar trámites, en este caso los correspondientes a la formalización de la propiedad. Se debe tener presente que bajo un esquema multidimensional las funciones de las instituciones se suscriben a procesos económicos, sociales y políticos.

iv) Respecto a la categoría de legitimidad debemos decir que la misma es habitual para el examen de instituciones de elección popular, para el caso que nos atañe se tendrá en cuenta en la medida que se busca identificar dentro de los relatos de quienes han sido víctimas de despojo, cuál ha sido el papel de las instituciones. Así pues, por legitimidad se entenderá el cumplimiento del sistema regulatorio vigente. La legitimidad es una condición que refleja el alineamiento de la organización con las normas y leyes de una sociedad determinada (Franco 2014).

Al examinar el funcionamiento y la estructura orgánica del régimen de propiedad rural, las categorías de análisis funcionarán como guía metodológica para la evaluación de su incidencia en los procesos de concentración y despojo de tierras.

1.2. Procesos de formalización para la propiedad rural

La normativa civil es la fuente principal de los procesos de formalización predial, mas no es la única. Es por esto que éste trabajo pretende hacer un esfuerzo por describir los diferentes esquemas de propiedad.

Las normas sobre derechos reales se encuentran consignadas en el libro II del Código Civil. El régimen de propiedad rural establecido desde el S. XIX funciona como campo de acción jurídico, es decir, brinda una herramienta de legitimación de los particulares en relación a los bienes. “La expresión derecho real designa, principalmente, un verdadero haz de poderes directos sobre un bien, para procurarse todos o parte de los beneficios, utilidades y servicios, estimables en dinero, que aquel puede proporcionar.” (Ternera 2007)

La regulación jurídica colombiana dispone que a partir del derecho de propiedad se da la capacidad de uso, disposición y goce de los bienes, además que se otorga al dueño ciertas acciones para proteger la exclusividad de su derecho. Derecho que es reconocido desde diferentes instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 21; y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En esta medida su importancia repercute directamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos, porque de la garantía manifestada se concibe la capacidad de poseer vivienda y en el caso rural la posibilidad de explotar el predio y desarrollar alguna actividad económica prominente.

El sistema jurídico colombiano reconoce distintos tipos de relación de los campesinos con la tierra. En esta medida podemos hablar de una propiedad con un dominio pleno y a partir de allí una serie de figuras jurídicas que reconocen limitantes a las capacidades de uso, goce y disfrute.² Debemos diferenciar las categorías establecidas partiendo de la propiedad con dominio absoluto, la cual se alcanza mediante un esquema individual o colectivo, siendo este último destinado a proteger minorías como comunidades indígenas o afro descendientes.

² Nos referimos a los poseedores, ocupantes y tenedores. Ver Anexo 1.

Se da una relación informal con la tierra cuando no se cuenta con un justo título registrado ante la oficina de Registro e Instrumentos Públicos, teniendo en cuenta el procedimiento administrativo o judicial que esto demanda. Se debe realizar un registro en las entidades catastrales de nivel municipal, siendo esto de vital importancia para el cobro del impuesto predial. Se genera un folio de matrícula de propiedad inmobiliaria por cada unidad catastral, a partir de estos documentos se obtiene una caracterización física, valor económico y situación jurídica de la propiedad correspondiente, de acuerdo al Decreto 1520 de 1970.

Desde un sentido amplio la formalización de predios incluye para los poseedores, aquellas personas que usan y gozan el bien con ánimo de señor o dueño determinado predio, juicios de pertenencia o procedimientos expeditos para sanear la propiedad. Para los ocupantes se incluye la necesidad de procesos administrativos tramitados en el INCODER y bajo los requerimientos de la Ley 160 de 1994.

La observación de los procesos institucionales nos lleva a determinar una variedad de procesos administrativos, notariales y judiciales al momento de determinar la propiedad. Siguiendo el trabajo desarrollado por el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada catalogamos los procesos considerando su naturaleza:

Primero, procesos de Titulación o de Adjudicación por vía administrativa, dentro de los cuales encontramos: iniciación de procesos administrativos de adjudicación de baldíos y los casos inconclusos de adjudicación de predios o parcelas, en zonas de protección colectiva, mediante el Fondo Nacional Agrario.

Segundo, procesos de formalización de las Posesiones en suelo rural y urbano que incluyen: *i*) Procesos judiciales ordinarios de pertenencia (desarrollado por el Código de Procedimiento Civil) *ii*) Arreglo directo entre las partes: Posesiones en los que existe documento de compraventa o voluntad de las partes para realizar la debida protocolización de escritura y el registro. *iii*) De igual manera se encuentran los procesos agrarios de pertenencia: procedimientos establecidos por la Ley 4 de 1973, su decreto reglamentario 508 de 1974 y el Decreto Ley 2303 del 1989.

Tercero, formalización de derechos sucesorales: *i*) Procesos sucesorales por vía judicial. *ii*) Procesos sucesorales por vía notarial. *iii*) Sucesiones liquidadas no registradas.

Como veremos este tipo de procesos es especialmente frecuente dentro del escenario rural, entendiendo la composición del hogar campesino y sus actividades de subsistencia.

Cuarto, los procesos de carácter especial relacionados con la propiedad colectiva. La propiedad de territorios para resguardos indígenas requiere: la resolución de Constitución y título colonial o Cédula Real; para tierras colectivas de las comunidades negras: la resolución de adjudicación y para las reservas indígenas: Resolución de constitución del INCODER.

De igual manera debemos tener en cuenta las reclamaciones patrimoniales emprendidas por la población en situación de desplazamiento o afectadas por la violencia, a las cuales se pretende dar respuesta mediante los mecanismos establecidos por el marco general de atención a los desplazados, especialmente desde la Ley 387 de 2007.³

Cuando el propietario de un predio es desplazado podrá acercarse ante el Ministerio Público (Personerías Municipales, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría) o al INCODER y solicitar que éste sea incluido en el Registro de los Predios Rurales Abandonados por la Violencia (RUPTA). Se deberá informar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos acerca del ingreso del predio al RUPTA, con el fin de evitar que sea vendido transferido en contra de la voluntad del propietario.

Resaltamos que no existe un camino único para el proceso de formalización, sino que existe una variedad de circunstancias reconocidas legalmente. En este sentido se debe acudir a una serie de trámites administrativos, judiciales y notariales. Tampoco se ha consolidado una unidad orgánica dentro del diseño institucional.

1.3. Marco normativo y diseño institucional del Régimen de Propiedad Rural entre 1990 y 2005

En materia rural el Estado colombiano ha sido incapaz de generar una reforma agraria exitosa, tal impedimento ha obstaculizado el desarrollo rural desde tiempos coloniales (Albán 2011). El régimen de propiedad hace parte de este retraso institucional y si bien ha

³Se han logrado atender 147.955 solicitudes de derechos sobre predios, de los cuales el 73% han sido cobijados mediante la implementación de la Ruta Colectiva y el restante 26,47% por la Ruta Individual. Con relación al área correspondiente a estos derechos, el acumulado de hectáreas alcanza a 30 de noviembre de 2.010 una cifra de 4.741.940,39 hectáreas que contienen 119.854 predios sobre los cuales 111.324 personas tienen o han ejercido derechos. (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional [Acción Social] 2010)

sido modificado en distintos momentos históricos no ha contribuido al proceso de formalización de los predios rurales.

Realizar una revisión a la evolución histórica del régimen de propiedad escapa a los objetivos de este trabajo. Nos compete identificar las variables normativas vigentes para el periodo 1990 a 2005, para lo cual debemos hablar de la Constitución de 1991, que si bien introdujo una ampliación en los mecanismos legales para el reclamo y la garantía de los derechos ciudadanos, se queda corta al momento de reconocer la condición y la propiedad campesina.

Para empezar las referencias de la Constitución a los campesinos son muy débiles o casi inexistentes. Se les nombra en el artículo 64 al equipáralos con trabajadores agrarios.⁴ Esto quiere decir que no se dio un tratamiento especial a los campesinos para la defensa de sus derechos, como si sucedió con las minorías políticas, tales como, grupos étnicos, indígenas y mujeres. (Peña, et al.2014)

Durante el periodo examinado uno de los puntos más determinantes es la Ley 160 de 1994, que estableció el marco normativo de reforma agraria. La norma estableció subsidios para la compra de tierras como créditos no reembolsables, con cargo al INCORA. Tal plataforma hace parte de un modelo de desarrollo que vincula las dinámicas de producción y distribución. De este modo se ha mantenido que “los fundamentos generales de la citada ley, es el acceso progresivo a la propiedad de las tierras de los trabajadores agrarios, mejorar los servicios públicos rurales y la calidad de vida e ingresos de los campesinos.” (Hernández 2011, pág. 69)

Académicos como: Álvaro Balcázar, Manuel Rojas y Absalón Machado, coinciden en que si bien se da una reactivación de la reforma agraria que dinamizó el mercado de tierras, cabe señalar que la política redistributiva se enmarca en la facilitación de la negociación directa entre propietarios y campesinos. Esto conllevó a una reducción de la influencia estatal en lo referente a temas como la adquisición y dotación de predios. La Ley 160 estableció un subsidio a los beneficiarios, equivalente al 70 por ciento para la compra

⁴ Artículo 64 Constitución Política [C.P.]. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la *propiedad* de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

de tierras. El 30 por ciento restante puede provenir de una línea de crédito especial de tierras, dispuesta por los intermediarios financieros, o de recursos propios.

Uno de los temas centrales es la vinculación de los desplazados y minorías étnicas como grupos de especial tratamiento para la reivindicación y consolidación de sus derechos patrimoniales. Una de las piezas clave en este propósito es la Ley 387 de 1997, con el Decreto reglamentario 2007 de 2001. El objetivo principal de esta norma fue facilitar y proteger los derechos de la población desplazada en razón de su estado de vulnerabilidad. Una de las herramientas de protección fue el Registro de los Predios Rurales Abandonados por la Violencia (RUPTA),⁵ mediante el cual se pretendía sacar del mercado a los predios de las víctimas y proteger sus derechos de propiedad. (Peña, et al., 2014)

Ahora bien, desde una visión funcional en Colombia el régimen de propiedad rural se desarrolla desde un sistema dual: un registro jurídico y uno catastral. Es obligatorio el establecimiento de una escritura pública tras las transacciones de compraventa, con el fin de dar fe pública. Nuestro sistema jurídico civil diferencia entre título y modo, siendo ambos necesarios en un proceso de formalización:

La venta por sí sola de un bien raíz no envuelve la transferencia del dominio, no involucra el cambio de dueño, el contrato así celebrado únicamente es título. Para verificar pues el cambio de titular se requiere precisar un paso más, se debe efectuar una solemnidad, cual es, el registro de la escritura pública en la oficina de registro de instrumentos públicos, de esta manera se presenta el modo de adquirir, pues queda perfeccionada la tradición. (Sentencia: 76111312100120120002000, pág. 6)

El IGAC es el encargado de generar la cartografía básica de Colombia, elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble y realizar el inventario de las características de los suelos. Por lo tanto su importancia radica sobre la capacidad de ubicar los predios y de dar una caracterización apropiada de los mismos.

Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene como función llevar el registro inmobiliario a través del folio de matrícula, donde se visualiza la historia jurídica del bien pues se adjuntan actos, contratos, providencias judiciales, administrativas o arbitrales, que impliquen constitución, declaración, aclaración, de un derecho real o accesorio. (Superintendencia de Notariado y Registro [SNR] 2013).

⁵ Art. 19 de la Ley 387 de 1997: El INCORA llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia e informará a las autoridades competentes para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de título de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos.

La SNR se concibió en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, a través del Decreto 3346 de 1959, en ese momento como dependencia del Ministerio de Justicia. Desde 1992 se han generado una serie de reformas estructurales que han conllevado a la configuración de esta entidad como una unidad administrativa especial, con personería jurídica y patrimonio autónomo adscrita al Ministerio de Justicia.

Durante el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se generó un cambio en el diseño institucional, se modificaron objetivos, funciones y los organismos encargados. Prueba de ello es la consolidación del INCODER, el cual fue creado en medio del ánimo reformista, y nace de la fusión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA. Además de concentrar las funciones de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica UMATA.

El INCODER está vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dentro de sus funciones se encuentra establecer zonas de reserva campesina y delimitar las zonas de desarrollo empresarial, con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural, dados en la Ley 160 de 1994. También le compete ordenar y adelantar la expropiación de predios, franjas de terreno, mejoras y servidumbres de propiedad rural privada o pública, cuando se determine su interés social. En este orden tiene la capacidad de revocar titulaciones, culminar titulaciones de baldíos, medidas de protección y buscar predios para compensación.

Cabe una mención especial a lo relacionado con la expropiación de la tierra por parte del Estado, pues como bien se ha dicho la intervención estatal se vio limitada en aspectos como la adquisición de predios. Desde la Constitución la eficacia de este proceso se ve perjudicada, ya que se vincula a las 3 ramas del Estado. El organismo encargado de tal tarea era el INCORA, creado por la ley 135 de 1961.⁶ Se dio prioridad a la consolidación de plataformas gremiales y a la focalización de fondos públicos y privados para la generación de créditos con el fin de facilitar el acceso a la tierra.

⁶ Entre 1962 y 1999 el INCORA afectó con fines redistributivos el equivalente a 1.8 millones de hectáreas, de las cuales 1.4 millones fueron adquiridas por compra, 350 mil fueron obtenidas por cesiones al FNA y apenas 70 mil corresponden a acciones de expropiación. Más de la mitad, el 58%, de las tierras adquiridas por compra se llevaron a cabo en los últimos 10 años, 1988 y 1999, pero principalmente entre 1988 y 1994. (Comisión Económica Para América Latina [CEPAL] 2001)

Los distintos intentos de reforma agraria han fracasado en la instauración de herramientas eficientes en lo referente a la producción y distribución agrícola (Hernández 2011). La labor normativa ha sido constante y variada afectando la estabilidad de los organismos e instituciones. Más aún, queremos resaltar que tal esfuerzo normativo ha recaído de manera perjudicial en el escenario de la regulación civil. “Las normas especiales sobre temas agrarios están basadas en los conceptos clásicos de derecho civil, pero con componentes especiales del derecho de tierras: por ejemplo, los modos de adquirir el dominio, el título y el modo, la posesión, la usucapión, la teoría sobre la voluntad, los vicios del consentimiento, etc., conceptos que tienen plena vigencia.” (Peña, et al. 2014, pág. 135)

1.4. Ambigüedad en el régimen de propiedad rural

Para resaltar las ambigüedades y fallas presentes en el régimen de propiedad es necesario volver sobre las categorías de Nohlen, resaltando su articulación con las necesidades de los ciudadanos.

i) En materia de participación, el régimen de propiedad se ha desarrollado bajo un acceso restringido. El IGAC ha dicho que cerca del 48 % de los predios rurales son informales, es decir, aproximadamente un millón 700 mil predios sin título de propiedad cierto.

Es así como el abandono institucional ha repercutido en escenarios como el difícil acceso a bienes públicos, desde la infraestructura hasta la seguridad. En todo el país hay 189 oficinas con la capacidad de realizar registros a predios rurales, para un total de 1103 municipios.

Cabe una mención especial a los campesinos que ocupan terrenos baldíos,⁷ quienes aún hoy en día ven restringidos sus derechos patrimoniales. Se debe decir que sobre los terrenos baldíos no se generan derechos de propiedad, sino una expectativa la cual sólo se

⁷ Hoy en día no se sabe cuáles son las tierras baldías de la Nación, si bien la anterior administración del Incoder actualizó una base de los baldíos repartidos hasta el año 2012, que estima en 23.431.557 has y en 619.937 predios. (Las2Orillas 2014, párr. 2)

consolida mediante un proceso de adjudicación, es decir, por decisión del Estado.⁸ Los procesos de adjudicación sólo proceden mediante ocupación previa y por solicitud ante el INCODER, quien examinará que el predio sea explotado y que su extensión no sea mayor al límite de las Unidades Agrícolas Familiares.

En este sentido la Ley 160 de 1994 creó el Sistema de Reforma Agraria y Subsidios para la Adquisición de Tierras para los campesinos que, así como lo afirma la profesora Peña (2014), estaba dirigido principalmente para el beneficio de los campesinos al formalizar títulos de predios baldíos, mas no se propone una redistribución en términos económicos.

ii) Al presentar la estabilidad como categoría de análisis para el régimen de propiedad encontramos que diferentes trabajos⁹ consideran la ambigüedad como uno de los elementos más problemáticos, pero no son muy precisos al determinar donde se presenta tal falla ni sus limitaciones. Así pues, para este punto se entenderá que la ambigüedad se presenta tanto en la complejidad con que se han configurado los procesos de propiedad como en la frecuencia con que se modifica el régimen.

Se ha resaltado que el régimen de propiedad se compone de una amplia variedad de procedimientos las diferentes instituciones que se hacen partícipes. Ahora bien, al no existir un régimen especial la regulación recae sobre la normativa civil, lo que se manifiesta en figuras como: los modos de adquirir el dominio, el título y el modo, la posesión y la usucapión. Para el campesino su relación con el predio puede variar entre la propiedad plena, la posesión, la sucesión intestada, el acuerdo sin registrar y la resolución, sentencia o escritura sin registrar, además de la falsa tradición. Lo anterior dificulta la consecución eficaz de las transacciones, pues cada etapa conlleva a diversos trámites.

La frecuencia con que se modifican las normas afecta de manera directa la estabilidad del régimen de propiedad, en la medida que las funciones y actividades se reparten de manera difusa, como sucedió con la Ley 387. “Las medidas que se toman y la forma en que se construyen no fortalece institucionalmente al Estado, por el contrario,

⁸ Art 65. Ley 160 de 1994: La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslativo de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad.

⁹ Trabajos como: *Reforma y contrarreforma agraria en Colombia*, de Álvaro Álban, y *Reforma agraria: del latifundio al neoliberalismo* de Jesús Carlos Morett.

dispersa las obligaciones de este en entidades territoriales y descentralizadas, haciendo aún más gravosa la situación de las víctimas, en la ley protegidas.” (Peña et al 2014, pág. 194)

En algunos casos los ánimos reformistas de los gobiernos perjudican de manera determinante el sano desarrollo de las instituciones involucradas. Tal es el caso de lo sucedido durante el gobierno de Álvaro Uribe quien unificó funciones de distintos organismos sin que esto signifique un fortalecimiento económico e institucional. Las reformas dieron a un mayor margen de maniobra para los despojadores. Nos referimos específicamente a la Ley 791 de 2002 que disminuye el término de la prescripción adquisitiva cambiando de forma definitiva uno de los modos de adquirir el dominio.

iii) Al referirnos a la efectividad es necesario hablar de la eficiencia y agilidad con que se emprenden los procesos de formalización. Tales parámetros se ven vinculados con elementos como los costos y tiempos invertidos en los requerimientos establecidos.

Uno de los factores sobresalientes son los altos costos vinculados con los procesos de formalización. Según el mismo Ministerio de Agricultura el costo promedio, para el saneamiento de la situación jurídica de un predio (pequeño), es de \$1.800.000.000, teniendo en cuenta honorarios, edictos, inspección ocular y el registro; y para un predio baldío es 800 mil pesos, en razón de la adjudicación, administración y registro.

Respecto al tiempo invertido en los procesos de pertenencia éste varía según la condición del solicitante y del predio mismo. Si bien la ley establece plazos para cada uno de los procesos, es usual que no se cumplan. Por ejemplo, para la adjudicación de predios baldíos se estima un tiempo de 60 días como tiempo mínimo,¹⁰ cifra que queda corta ante casos emblemáticos como el de los predios Las Pavas y El Garzal, (Verdad Abierta 2013) en donde la falta de definición ha tomado más de 15 años.

En el caso de la propiedad colectiva resalta el caso de la comunidad afro descendiente asentada en las orillas del río Naya, en el Valle del Cauca y el Cauca, quienes ostentan títulos de propiedad desde el S.XIX. Aun así desde 1999 han mantenido una solicitud frente al otrora INCORA, hoy INCODER, para que sus territorios sean

¹⁰ Proceso que requiere de 9 pasos que incluyen inspección ocular y la resolución del gerente regional. Para mayor información revisar cartilla de baldíos, realizada por Observatorio de Restitución y Regulación de derechos de propiedad. (Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad 2014)

reconocidos de manera legitimada, objetivo que sería exitoso 10 años después vía acción de tutela.¹¹

Al no existir unidad institucional, las funciones y procesos del régimen de propiedad son desarrolladas por distintos órganos lo que genera confusión sobre los pasos a seguir, además de aumentar los costos por transacción.

iv) Respecto de las condiciones de legitimidad, se ha dicho que tal característica obedece al lineamiento institucional con las normas y leyes. Teniendo en cuenta el objetivo del régimen de propiedad de proteger los derechos patrimoniales se dará validez a las normas cuando existe un amplio consenso social respecto de quien es dueño de un activo o flujo, quien lo merece, y si la sociedad la sociedad tiene la responsabilidad de proteger los derechos de ese dueño. (Thoumi 1995)

Al revisar la evolución histórica de este régimen no ha existido un lineamiento de legitimidad, los derechos de propiedad han estado asociados a capturas, privilegios y engaños. De esta manera se ha generado una separación de la visión económica de la jurídica al no existir el espíritu de redistribución y protección. La condición de legitimidad se encuentra mejor explicada desde su interacción con los ciudadanos, ya que es necesario examinar las situaciones de distribución y protección de la propiedad rural.

Para finalizar al hablar de ambigüedad en el régimen de propiedad nos referimos a la confusión generada al no existir un único proceso de formalización que unifique los trámites legales. La ambigüedad se configura como un fenómeno multidimensional que desde una visión institucional obedece a fallas en la participación, estabilidad, efectividad y legitimidad. Así pues se debe hablar de: un acceso restringido a las instituciones; la complejidad con que se desarrollan los diferentes procesos de formalización; los altos costos y demoras en los trámites legales; la inexistencia de un espíritu de redistribución y protección.

Hasta este punto se ha tratado de mostrar las falencias vinculadas a la naturaleza misma del diseño institucional y en menor medida su interacción con las dinámicas del conflicto armado. Es momento de profundizar sobre este último punto, teniendo en cuenta la región norte del Valle del Cauca.

¹¹ Proceso liderado por el colectivo de abogados José Alvear.

2. MODOS DE DESPOJO USADOS EN EL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA, ENTRE 1990 Y 2005.

En este capítulo examinaremos los diferentes modos de despojo a partir del análisis de las sentencias de restitución y de distintos insumos extraídos de medios de prensa regionales o nacionales, considerando los siguientes criterios de análisis: **i)** Condición de violencia, donde se examinan las dinámicas del conflicto a partir de 3 parámetros: si se generó un despojo o un abandono, el grupo que la ocasionó y la razón para la perpetración de tal actividad. **ii)** Relación con el predio, es decir, las características bajo las cuales se dio la adquisición original del bien, bajo qué condiciones se ha dado el desarrollo de ese derecho patrimonial y se examina si se ha generado algún tipo de fragmentación. **iii)** Condición de la víctima, que se refiere a las condiciones sociales y económicas al momento del abandono del predio y al momento actual de las víctimas, (momento en el que establecen el proceso de restitución de sus tierras).¹² Así pues, este acápite se divide en tres partes: un panorama general de las condiciones de violencia en la zona noroccidental del Valle del Cauca, una caracterización del modus operandi de los distintos grupos armados y un acercamiento a la situación de las víctimas del despojo.

2.1. Conceptos de Despojo y Abandono

La necesidad de los actores del conflicto por financiar sus acciones ha conllevado que la apropiación ilegal de tierras sea parte fundamental de la estrategia militar. Es pertinente examinar la debilidad institucional presente en el régimen de propiedad y sus consecuencias en las problemáticas rurales, sobretodo en el aumento de la concentración de tierras; pues no podemos desligar las acciones de violencia con los problemas estructurales del campo colombiano, tales como la desigualdad y la productividad. Lo dicho anteriormente se sustenta en lo expuesto por Pons-Vignon (2004, pág. 4): “Establecer la causalidad entre los problemas rurales relacionados con el establecimiento de la propiedad privada y los episodios de violencia no es fácil, puesto que los conflictos sobre la propiedad de la tierra pueden ser a la vez causa y consecuencia de la violencia.”

¹² El uso de estos criterios se manifiesta durante la realización de los cuadros analíticos de las sentencias de restitución citadas durante el desarrollo de este capítulo. Ver Anexo 2.

En este orden de ideas es pertinente considerar nociones conceptuales básicas en lo referente al abandono y al despojo. Para este trabajo se entenderá por abandono como:

La acción por la cual las personas o comunidades se ven obligadas a dejar tierras o territorios en los que vivían o trabajaban, fuera como propietarios, poseedores, ocupantes o tenedores, por causas como: Amenazas sobre su vida o la vida de sus seres cercanos, amenazas sobre su patrimonio o el patrimonio de sus seres cercanos, por el temor general sobre la zona por la violencia. (Acción Social 2010, pág. 15)

Por despojo se entenderá como “todas aquellas actuaciones mediante las cuales un bien ha salido del patrimonio de la persona, ya sea por circunstancias de hecho o a través de negociaciones o acciones que han sido revestidas con apariencia de legalidad sean administrativas o judiciales, todos éstos surgidos de un aprovechamiento de la violencia.”¹³ (CNMH 2009)

En Colombia las zonas rurales han sido el escenario predilecto de intensas luchas. Según diferentes estimaciones, la cantidad de tierra despojada se sitúa entre 6,8 y 10 millones de hectáreas. Estas cifras no toman en cuenta el despojo de tierras durante la época de la Violencia de 1946-1958, lo que significó el desplazamiento de 2 millones de personas abandonando más de 400.000 parcelas. (OIDHACO 2013)

Como veremos, tales fenómenos dan cuenta de una concentración por desposesión. Teniendo en cuenta lo planteado por el profesor David Harvey las tendencias de concentración se intensifican a partir de la liberación de un conjunto de activos a un costo muy bajo.¹⁴ (Harvey 2003)

2.2. Escenario de violencia y despojo en el Valle del Cauca

El Valle del Cauca ha sido el escenario propicio para la consolidación de la actividad criminal, tanto del fortalecimiento de las guerrillas campesinas, el cultivo y tráfico de estupefacientes como la realización de masacres y el desplazamiento de miles de pobladores locales.

¹³ No tienen en cuenta las definiciones dadas por la ley 1448 en el Art 74 con el fin de mantener una mayor relación entre el escenario de violencia y la condición de vulnerabilidad de la víctima.

¹⁴ El concepto de concentración por desposesión nace de la formulación del concepto de acumulación originaria acuñado por Marx, bajo un escenario de globalización. Siguiendo a Harvey, las dinámicas de producción terminan por consolidar un proceso continuo de reajustes espaciales temporales, los cuales se manifiestan a través de la distribución de la propiedad rural.

Si se revisan los orígenes del conflicto encontramos que la violencia bipartidista entre conservadores y liberales marcó la primera mitad del S.XX, caracterizada por las luchas entre gamonales y se podría denominar como la primera etapa de violencia campesina. La segunda mitad del S.XX es reconocida por las manifestaciones y protestas campesinas que terminaron por consolidar el conflicto civil. En este escenario diferentes grupos subversivos han pretendido adquirir el control territorial sobre el departamento. Las FARC hacen presencia en el departamento desde la década de los 70, en municipios como Buga, Palmira, Florida y Pradera.

Desde los años 80 se registró la implementación de los cultivos ilegales. Es así como los narcotraficantes decidieron enfocar sus acciones en la zona norte,¹⁵ debido a que encontraron amplios territorios abandonados y jornaleros empobrecidos. De igual manera coincidió la vigencia del trabajo político que desarrolló el ELN, desde el Frente Luis Carlos Cárdenas, y la entrada en la región del M-19 con comandos enviados desde la concentración de Santo Domingo en el Cauca.

Durante el periodo 1980 y 1995 se comprobó que el narcotráfico logró adquirir bienes en cerca del 42% de los municipios del país. En el Valle del Cauca, cerca del 85% de los municipios registraron tierras adquiridas por acciones del narcotráfico, siendo el departamento con mayor presencia de recursos ilícitos. (Reyes 2011, pág. 74).

La pérdida económica que generaban los cultivos de café a comienzos de la década de los 90 y la entrada del narcotráfico en la zona noroccidental terminó por modificar el mercado de tierras. Se intensificaron las ventas a bajo costo y las estafas, peor aún los despojos y abandonos de predios.

El fin del S.XX estuvo marcado por el sangriento enfrentamiento entre narcos tras la caída de los cabecillas del cartel de Cali y la entrada de los grupos paramilitares, a través del grupo Calima y su comandante Éver Velosa alias “HH”.¹⁶ En esta medida se da una transformación en las estrategias y dinámica del conflicto: las FARC diversificaron su presencia con el Bloque Arturo Ruiz (300 hombres en la cordillera central), la columna

¹⁵ En el Dovio estaba surgiendo el poder económico de Iván Urdinola, que se empezaba a enfrentar con los guerrilleros asentados en San Quinini y el Canon de garrapatas. Urdinola sería el primer gran narcotraficante de la zona norte del Valle del Cauca.

¹⁶ Según “HH” los paramilitares en el Valle del Cauca se distribuyeron así: frente Cacique Calarcá (Sevilla, Bugalagrande y Andalucía); el Central (Tuluá, Buga, Río Frío y Trujillo); frente Pacífico (Calima Darién, Dagua, Restrepo, Cisneros y Buenaventura); Frente Farallones (Jumbo, sur del Valle y norte del Cauca). (Verdad abierta 2009)

Víctor Saavedra (60 hombres en áreas rurales del centro Cerrito, Buga y Ginebra) y la columna Gabriel Galvis en el suroriente (120 hombres, en Florida). Por su parte el ELN fortaleció la acción del frente urbano Omaira Montoya, y creó el frente José María Becerra. (Iris 2008)

Con la desmovilización de los paramilitares se desata la violencia entre los grupos BACRIM por el control de las actividades relacionadas con el narcotráfico. Este movimiento tiene como lugar de nacimiento los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar. Se distinguen dos grupos principales: los Rastrojos liderados por Wilber Varela, “Jabón”, y los Machos liderados por Diego León Montoya, “Don Diego”, quienes aún hoy en día mantienen una presencia fuerte en la zona.

Desde 2003 se ha presentado un recrudecimiento de la violencia, teniendo como característica principal la ejecución de masacres a manos de los grupos paramilitares. Si se tienen en cuenta datos desde la década de los 80s se han perpetrado 2087 masacres con más de nueve mil víctimas en todo el país. En el Valle del Cauca se contabilizaron cincuenta masacres, 61,7% de estas ocurrieron en las zonas rurales y el 38,3% en zonas urbanas. Es decir representa el 22% del total nacional. En cuanto a los secuestros, el Valle del Cauca ha vivido un gran número de secuestros múltiples, llevados a cabo tanto por las guerrillas como por las autodefensas. (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2003)

Las condiciones de violencia y el abandono institucional han terminado por establecer un difícil escenario para las víctimas. En el Valle del Cauca la violencia terminó por determinar una fuerte migración de personas a los centros urbanos, siendo uno de los departamentos de mayor recepción de desplazados en el país. Según el PNUD (2003), el Valle del Cauca expulsó y recibió en el periodo 1985-1994 el 2.1% y el 5% respectivamente, del total de población desplazada en Colombia. Lo anterior juega un papel definitivo en la consolidación de la pobreza urbana y los espacios de marginalidad.

2.3. Acción paramilitar: las masacres y el despojo sistemático como herramientas de intimidación y control social

Las condiciones geográficas y la importancia estratégica del departamento han sido factores determinantes en la perpetración de masacres y acciones militares. Los municipios de Bolívar, Trujillo y Riofrio, ubicados en el noroccidente del departamento, han sido reconocidos como una de las zonas más afectadas por la violencia.

Siguiendo la delimitación temporal por la que se guía este trabajo, desde 1990, y partiendo del relato de las víctimas los primeros grupos en ejecutar acciones de despojo y provocar abandonos masivos fueron los paramilitares. En este orden de ideas el desplazamiento de campesinos se da bajo determinadas situaciones de intensa violencia: asesinatos selectivos, masacres, amenazas directas, secuestro, extorsiones y uso indebido de predios y bienes pertenecientes a campesinos.

Para empezar, los paramilitares entran a la zona norte del Valle del Cauca con el fin de mantener un corredor exclusivo para el transporte de estupefacientes proveniente del Urabá antioqueño.¹⁷ En su tarea el grupo Calima mantiene confrontaciones armadas de manera constante en contra de los grupos guerrilleros como el ELN y las FARC.

Las sentencias de restitución dan cuenta del asesinato selectivo de familiares, allegados y vecinos a manos de paramilitares, quienes arribaban a las pequeñas veredas y con lista en mano decidían quienes debían abandonar la zona o ser asesinados. El objetivo era la destrucción del nicho social que daba o podía dar apoyo a las guerrillas.

La zona norte del Valle del Cauca es habitada por campesinos provenientes de otras regiones como Antioquia, Caldas, Cauca y Tolima, quienes colonizaron los distintos territorios baldíos. Estos procesos fueron incentivados por el gobierno local y central a comienzos del S.XX, a través de las juntas pobladoras.¹⁸ Los cultivos de café serían la fuente de ingresos más importante.

¹⁷ El comandante del Bloque Calima, Eder Veloza alias HH, relata la entrada de este grupo como una reacción al pedido de los empresarios a los hermanos Castaño, dando cuenta de una relación que componían grupos armados, políticos y empresarios. Ver anexo 3.

¹⁸ En el Valle ha sido predominante la existencia de agentes externos que cumplen un papel de regulación social. “En el S.XX las llamadas *juntas pobladoras* encargadas de organizar el proceso de colonización, cumplieron la función de regular las relaciones entre los colonos, así como de dirigir la distribución de las tierras y su uso.” (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2003, pág. 6)

Los conflictos entre los pobladores y los grupos paramilitares se dieron en la medida que los primeros no colaboraban en la obtención de información. En muchas ocasiones las agrupaciones de las AUC estaban conformadas por ciudadanos que funcionaban como informantes, tales interacciones se prestaron para malinterpretaciones, pues quebraban la confianza al interior de las comunidades. El ritual de terror caracterizado por rumores, amenazas e insultos tenía como objetivo poner en condición de inferioridad a los campesinos. (CNMH 2014)

Al examinar las causas del abandono de predios por parte de las víctimas se resalta que la mayoría se dan gracias a acusaciones que carecen de pruebas. Los grupos paramilitares generaban una presión especial sobre los pobladores en razón de su actividad económica, para el uso de sus predios y en algunos casos en razón de las actividades de liderazgo y apoyo político.

Las sentencias de restitución muestran como los paramilitares llegaban a los predios increpaban a los nativos, sin mayor explicación y con la premisa de ser colaboradores de la guerrilla o de las autoridades. Por ejemplo, uno de los hijos de los reclamantes es amenazado luego de ser acusado de delatar un laboratorio de droga y así lo detalla la sentencia: “(...) cuando ya había incursionado en la zona el Bloque Calima, llegó de visita el hijo de la solicitante José Toro, quien fue acusado por dicho grupo ilegal de delatar la existencia de un laboratorio de drogas, situación que lo obligó a salir huyendo del lugar, migrando a la ciudad de Cali.” (Sentencia: 76111312100320130001700, pág. 2)

La ejecución de asesinatos terminó por destruir el núcleo familiar de los campesinos, además de las redes sociales que componían la vida en las veredas. Las personas veían la necesidad de abandonar sus predios cuando era inminente el asedio contra sus vidas y la de sus seres queridos.

Ahora bien, la intervención de los diferentes actores es determinante en la condición de inferioridad de los campesinos, pues se mezclan las acciones coercitivas y el caso de la señora Ubaldina Blandón es demostrativo en esta materia: para el año de 1991, en el marco de los hechos de la masacre de Trujillo, su hijo fue secuestrado por grupos desconocidos. Cuando se da su reaparición miembros del ejército les advierten que debían decir que el acto había sido obra del ELN. Tiempo después, en su predio aparecieron guerrilleros del ELN, quienes acamparon y la tildaron de ser colaboradora del ejército. Para el año 2005

debió abandonar el predio, pues los paramilitares llegaron y con lista en mano amenazaron a su esposo, hijos y a su hermano. (Sentencia: 76-111-31-21-002-2013-00029)

Los paramilitares también pretendieron beneficiarse de la apropiación de bienes, lo cual se dio mediante la extorsión o la ocupación directa. Se debe decir que si bien en la mayoría de los casos las personas dicen subsistir de cultivos de productos como el café, el plátano y el lulo, de igual manera se veían sometidos a cumplir con cánones para poder vivir en sus predios.

Bajo la motivación económica se dieron ciertas circunstancias que revelan el poder coercitivo que adquirieron los paramilitares. Luz Mery Sánchez López, una de las víctimas reclamantes en el corregimiento de Salónica, municipio de Riofrío, manifestó que los grupos paramilitares la extorsionaron con el fin de obtener 500 mil pesos mensuales. Debido a que Luz Mery debía responder por varios créditos en entidades bancarias, los cuales fueron adquiridos con el fin de montar una pequeña tienda, le fue imposible satisfacer las necesidades de los paramilitares, por lo cual debió abandonar su predio. Durante el tiempo que la víctima se vio forzada a vivir en Bogotá uno de los vecinos el bien, mediante una transacción telefónica. (Sentencia: 76-111-31-21-002-2013-00021-00)

También era objeto de revisión por parte de estos grupos las transacciones realizadas con ganado y cultivos. En uno de los casos el desplazamiento de la víctima se da en la medida que es amenazado al haber comprado un ganado que había sido robado por los “Rastrojos”. (Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00005-00.) Otra de las modalidades es el robo directo. Los paramilitares decidían entrar a los hogares de manera ilegal mientras los residentes no se encontraban para saquear dinero o recursos que les fueron útiles.

Dentro de la revisión realizada se rescata la necesidad de los grupos armados por mantener un control preponderante en las zonas de tránsito pues tal propósito conllevaba a una intensificación de los enfrentamientos en estas zonas. Los grupos armados dentro de su accionar llegaron a restringir el libre acceso y movimiento de los ciudadanos.

Para finalizar, uno de los elementos sobresalientes en la acción paramilitar es la coerción con fines electorales y un factor que no deja de ser revelador, es la relación de estos grupos con las fuerzas armadas. A diferencia de otros grupos, los paramilitares pretendieron ejercer una intervención política de manera directa. Resaltamos dos procesos:

primero, la amenaza directa a líderes y políticos de la zona; segundo, presionar a los ciudadanos para que voten por determinado candidato.

En este aspecto es importante señalar el papel jugado por las BACRIM, las cuales están conformadas en su gran mayoría por ex combatientes paramilitares,¹⁹ y quienes empezaron apodándose como grupos RCP: Rondas Criminales Populares. Estos han mantenido una fuerte presencia en la zona, es más mantienen una amenaza constante sobre el retorno de las víctimas. Camionetas realizando vigilancia o llamadas telefónicas, han sido actos de violencia constante en los procesos de restitución.

Es tal la autoridad que adquirieron grupos como los Rastrojos que en determinado momento llegan a exigir a un Presidente de Junta de Acción Comunal el apoyo a un candidato para la Alcaldía. Al no darse tal apoyo el ciudadano debe abandonar sus bienes: “un grupo que usaba un brazalete “RCP” (Rondas Campesinas Populares) que luego se denominó Los Rastrojos, lo presionaba para que apoyara al candidato Castaño a la alcaldía, quien quedó electo.” (Sentencia:76 111 31 21 002 2013 00028 00)

En uno de los casos examinados los campesinos dicen ser víctimas de falsos positivos, a raíz de la acción criminal de los paramilitares y el ELN. Luego del enfrentamiento, el ejército intervino la zona para presentar a las víctimas como falsos positivos:

las unidades militares simularon un enfrentamiento con las víctimas a quienes mostraron como personas muertas en combate, efectuaron una serie de disparos desde y hacia la vivienda del señor LADINO; pretendieron, con el cambio de la escena del crimen, justificar el cruento sacrificio de la población civil haciendo pasar a las víctimas como miembros del ELN y divulgar esa apariencia que reforzaron vistiendo a los inmolados con prendas militares, pero sin percatarse que las balas atravesaban la piel y no los uniformes de los supuestos guerrilleros. (El País 2003)

De igual manera se ha comprobado que en la región se desarrollaron acciones conjuntas, según se ha establecido con el fin de mantener una lucha constante contra las guerrillas:

En el mes de febrero de 1991, paramilitares de la estructura conformada por narcotraficantes, militares y policías que actuaban con el respaldo de algunos miembros del Batallón Palacé de Buga y el Distrito de Policía Tuluá, quienes perpetraron arbitrariamente en la madrugada el domicilio de la señora María Elena, “portaban armas de corto y largo alcance y estaban encapuchados”, la finalidad de la visita era “buscar y obtener armas, porque según ellos en mi casa guardábamos armas, al no encontrar armas empezaron a agredir física y verbalmente a mi esposo. (Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00005-00, pág. 3)

¹⁹ Después de 10 años de la desmovilización de 564 hombres del Bloque Calima, en 2004, el 26% ha vuelto a delinquir y bajo las ordenes de mandos medios que no se entregaron permanecen en las BACRIM. (El País 2014, párr. 3)

Este tipo de fenómenos conllevan a una pérdida de confianza por parte de los campesinos hacia las autoridades. Es más, dentro de las alternativas a seguir no es viable acudir al ejército o a la policía.

Estás tranquilo en tu casa, llegan y te matan a tus familiares, se los llevan y los torturan, no sabes y no vuelves a saber de nada. ¿A dónde vas? Te vas donde la Policía, que supuestamente es la gestora de mantener el orden público. Llegas allá y te dicen: ‘Vea, cálese la boca, porque si no usted también se la pueden llevar’. Una decepción completa. (Pueblo 2013, párr. 13)

Al igual que en el resto del país, las mayorías de acciones de despojo fueron perpetradas por los paramilitares, concentrando un fuerte poder social, aunado por los narcotraficantes y el apoyo cómplice de las fuerzas militares.

Dos hechos marcaron el nacimiento de las BACRIM en esta zona del departamento: primero, la desmovilización de los grupos paramilitares que se inicia en el 2004, con la entrega de 564 hombres pertenecientes al Bloque Calima (Verdad Abierta 2012). Segundo, al caer el cartel del Valle no existió un poder que monopolizará la actividad criminal, lo que conlleva a Diego Montoya y Wilber Varela a conformar los Rastrojos y los Machos.

2.4. Conflicto armado y la actividad de los grupos guerrilleros

Las denuncias presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras permiten identificar dentro de los municipios los corregimientos donde las condiciones de violencia se intensificaron. De esta manera podemos decir que las guerrillas ejercieron una mayor presencia en los municipios de Bolívar y Rio Frio. La acción de los grupos guerrilleros se caracteriza por un elevado número de secuestros y extorsiones. (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2003)

El modo operativo de las FARC comprendía la retención involuntaria de los campesinos sin importar su procedencia o situación económica, con el fin de conseguir recursos de las familias o de las actividades económicas que los secuestrados desarrollaban:

Para el 5 de marzo de 1996, el señor LUIS MANUEL MORENO LLANOS, se desplazaba a caballo por el corregimiento de Salónica, cuando fue interceptado por hombres con armas de fuego de largo alcance, quienes le dijeron que estaba secuestrado por las FARC, siendo movilizado hacia la parte alta del corregimiento, luego a Venecia, Trujillo, Andinápoles, La Zulia, permaneciendo en cautiverio durante dos meses, custodiado por seis u ocho hombres vestidos con uniformes camuflados, que lo intimidaban con la amenaza que si la familia no pagaba el moría, por lo cual se fugó. (Setencia:76-111 -31 -21 -002-2013-00016-00, pág. 3)

Los grupos guerrilleros se ven sumergidos en la mayoría de los combates que las víctimas relatan. Las víctimas se ven obligadas a abandonar los predios rurales gracias a las fuertes confrontaciones en la zona. Es una constante dentro de estos relatos encontrar que los grupos guerrilleros mantienen una identificación de los campesinos, lo que conlleva a un hostigamiento continuo. “Su hijo LUIS MORENO, fue víctima de secuestro, por un grupo de hombre armados, al parecer guerrilleros, quienes al sacarlo por la fuerza fue llevado con rumbo desconocido. Luego de dos meses de angustia y zozobra, su hijo pudo escapar de manos de los captores. Tiempo después su conyugue Sufre un atentado.” (Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00019-00, pág. 3)

También se observa distintos intentos de reclutamiento a menores de manera forzosos, cuando estas acciones no tenían éxito: “Raptaron a la menor Carmenza vallejo (hija de la peticionaria), con el objetivo de alistarla en sus filas, pero ante la insistente búsqueda de la madre y los quebrantos que presentó la jovencita, fue devuelta a su hogar por un sujeto, al parecer del mismo grupo guerrillero, quien además le dijo a la señora ALBA NELBY que debía irse.” (Sentencia: 761113121002-2013-00004-00, pág. 2)

La guerrilla mantiene acciones armadas con el fin de subsistir en el escenario rural y ser reconocidas por los ciudadanos. La confrontación frente a grupos paramilitares los ha llevado a la ocupación de bienes para protegerse o fortalecer su organización.

2.5. Posicionamiento del narcotráfico en las dinámicas de despojo y abandono

La presencia del narcotráfico en el Valle del Cauca ha sido constante y de vieja data. Desde los años 70s los diferentes “capos” han mantenido un fuerte poder, sobretodo en el norte del departamento, donde han establecido su centro de operaciones.²⁰ Se debe rescatar que debido a su ubicación la región se configuró en paso estratégico entre el Urabá antioqueño y la costa pacífica, mas no se debe desvincular las condiciones sociales y económicas de esta región.

²⁰ Dentro de los narcotraficantes de primer nivel que han operado en la zona se reconocen a: Víctor Patino Fomeque, Hernando Gómez Bustamante (alias *Rasguño*), Gabriel Puerta (alias *el Doctor*), Joaquín Mario Valencia, hoy extraditados a Estados Unidos; Juan Carlos Ramírez Abadía (alias *Chupeta*), capturado en Brasil, y Carlos Alberto Rentería (alias *Beto Rentería*).

Los primeros cultivos de coca en el Valle del Cauca se dieron en el noroccidente. Ciertas características como una baja densidad urbana y una serie de poblaciones rurales diseminadas aleatoriamente permitieron el traslado de laboratorios de coca hacia zonas montañosas como La Celia y El Cairo. Lo anterior sumado a la crisis en el mercado del café que dejó una gran mano de obra campesina sin trabajo terminó por configurar el escenario perfecto para la entrada de los narcotraficantes.

Vale la pena resaltar que en esta zona los delincuentes no actuaron de manera ordenada bajo el esquema de “cartel”, sino que respondieron al control territorial y por ende a la conformación de ejércitos particulares. Ahora bien, en el marco de la masacre de Trujillo las acciones criminales estaban encabezadas por Henry Loaiza, el “Alacrán”,²¹ quien empleo mecanismos como las amenazas directas, asesinatos, torturas, el uso ilegítimo de figuras jurídicas y la compraventa a bajos precios.

Uno de los mecanismos más llamativos usados por el “Alacrán” es el uso de formas jurídicas para la compra de haciendas. Como se ha logrado comprobar Loaiza configuró empresas fachadas como Loaiza y Compañía y Ganaderías Ache para ser usadas como titulares de los predios despojados. Durante el conflicto los predios fueron usados como lugares de tortura o para esconder secuestrados. Cabe resaltar que muchas organizaciones del Estado colombiano actuaron de manera deficiente o como cómplices de los actores ilegales:

Con las firmas que los paramilitares obligaron a Mario (víctima) y a sus hermanos a estampar en las escrituras en blanco, alias ‘El Alacrán’ registró las 99 hectáreas a nombre de la Sociedad Loaiza Díaz y Compañía S. en C. o Ganaderías Ache, del cual el narcotraficante era el representante legal (...) El despojo se concretó el 16 de agosto de 1994 cuando registró esos predios en la Notaría Segunda de Buga y en la Oficina de Instrumentos Públicos de ese mismo municipio. Por los apellidos consignados en la escritura, la Unidad de Restitución sospecha que puede haber una presunta relación entre Loaiza y la entonces Notaria encargada de Buga por lo que le pidió a la Fiscalía investigar. (Verdad Abierta 2014, párr. 14)

En el Valle del Cauca se presentó un fenómeno particular y es la compra de predios, algunos de ellos con sobre costos, con dineros del narcotráfico el cual se da bajo dos procesos: primero, la intención de los narcotraficantes de lavar los activos obtenidos de sus actividades ilícitas; como se ha demostrado la compra de finca raíz urbana y rural se ha convertido en un mecanismo recurrente para lavar dinero del narcotráfico (Kalmanovitz)

²¹ Narcotraficante condenado a 30 años de cárcel por los sucesos de la masacre de Trujillo y a quien se le incautaron más de 53 bienes.

López 2006). Segundo, el asentamiento y el propósito de apropiación de determinado territorio por parte de las bandas narco criminales, lo cual se da bajo la estrategia de ataque al enemigo, la destrucción de su base social y la apropiación de sus medios de financiación:

Destaca en esta lógica el municipio de Riofrio, en el cual narcotraficantes de menor rango han venido adquiriendo predios en sectores cercanos a Fenicia. Las compras se han propiciado a partir del amedrentamiento de los propietarios. En el caso de la Masacre de Trujillo, la hacienda Villa Paola, propiedad de Henry Loaiza, se hizo famosa por ser el sitio predilecto sobre el río Cauca, para asesinar campesinos y arrojar los cuerpos posteriormente al cauce. (CNR 2008, pág. 121)

Los pobladores relatan que Loaiza empezó realizando torturas y asesinatos en la hacienda Las Violetas, propiedad de Diego Montoya, para luego trasladarse a Villa Paola, de su propiedad. El objetivo era tener una mayor facilidad para deshacerse de los restos humanos, pues Villa Paola se ubicaba en las zonas aledañas al Río Cauca.

La consulta del documento: Trujillo una tragedia que no cesa, permite identificar otras modalidades de despojo, tales como la compraventa con sobreprecio y a un bajo costo.²² La compra con sobreprecio deriva de un interés en la propiedad ligado a diversas motivaciones: rutas de transporte y comercialización de insumos para la producción de coca o de la misma coca procesada; asentamiento de laboratorios, control militar de la región o sencillamente lavado de activos. “En concreto, se hace explícito el interés por el predio, configurándose las condiciones óptimas para la realización de la compra venta”. (CNR 2008)

En relación al poder adquisitivo de los fondos ilegales, los registros llevados por la dirección Nacional de Estupeficientes muestran los bienes de narcotraficantes incautados en la zona:

En Riofrio se han incautado 17 bienes rurales y 21 urbanos y se ha extinguido el dominio sobre 19 bienes. En Bolívar se han incautado 50 bienes y extinguido el dominio sobre 8, de los cuales 3 figuraban a nombre del Alacrán. En Trujillo se han incautado 12. Como dato complementario, en Cartago, uno de los municipios cabeza de la región, y sitio de residencia de algunos de los narcotraficantes, se han incautado 189 bienes urbanos. (CNR 2008, pág. 151)

La propiedad de tierras por parte de los narcotraficantes ha generado un importante cambio en la estructura de la tenencia de la tierra. Así como lo plantea el profesor Guido Germán el despojo de tierra en la zona norte obedeció a un interés narco paramilitar en medio de una lucha de poderes.

²² Sólo en el municipio de Bolívar se han presentado 161 solicitudes por 2.219 hectáreas que los campesinos abandonaron o les despojaron. (El Pueblo 2013)

Los predios que los grupos armados les arrebataron a los campesinos no se suman a los de los grandes industriales, sino a los de mafiosos que se adueñaron de ellos para reinvertir sus ganancias producto de la comercialización y distribución de la cocaína (...) La acción de bandas criminales como Los Rastrojos o de Los Urabeños en este departamento se basa en acumular tierras y más tierras para lavar activos. (El Pueblo 2013, párr. 1)

2.6. La condición de víctima y la afectación patrimonial

El relato de las víctimas permite ver que al darse el abandono de los predios en la zona, las víctimas se configuran como seres casi nómadas, quienes en muchos casos deben afrontar varias confrontaciones con el conflicto armado. Las víctimas suelen acudir a familiares o amigos cercanos y durante el tiempo que permanecen como desplazados mantienen interés por los bienes abandonados.

Desde un escenario general, se ha llegado a plantear que el Estado colombiano no ha logrado construir una política pública eficiente para la atención de las víctimas del conflicto, mostrando que el país vive una crisis humanitaria en razón al número de atentados, muertos y desplazados.

El tema rural ha sido una deuda histórica del Estado colombiano. En el departamento del Valle del Cauca, los hogares desplazados reportaron haber tenido que abandonar un total de 34.185,4 Has por el desplazamiento forzado, lo que significa un promedio de 19 Has por familia (Escuela Latinoamericana de Desarrollo y Cooperación [ELACID] 2005). Muchas de estas personas se asentaron en el departamento desde el S.XX provenientes de la costa pacífica, Cauca y Nariño; al verse en situación de desplazamiento se vieron obligados a refugiarse en ciudades como: Cali, Tuluá, Cartago, Buga, Palmira, Yumbo y Pradera.

Los campesinos no tuvieron autoridad alguna para definir su estadía sobre la región. Las motivaciones para el desplazamiento suelen ser amenazas en contra de los propietarios o familiares, en la medida que no colaboran de manera eficiente con los grupos armados, ya sea con la prestación de servicios o del predio, hasta la consecución de favores políticos y el uso de servicios de comunicación.

Algunas de las víctimas ni siquiera alcanzan a retornar a sus predios con vida por lo que sus hijos deben emprender los procesos de restitución, en los cuales se vincula el desarrollo de la sucesión. Dentro de los casos tenidos en cuenta 3 de las víctimas que

sufrieron los actos de violencia decidieron abandonar el país y son hijos o hermanos quienes hoy día reclaman la restitución de los predios.

La instalación del terror sobre la población civil lleva a la desintegración del núcleo familiar, en muchos casos quienes reclaman la restitución de los bienes son los hijos de los titulares del bien. Los campesinos son víctimas del conflicto no solamente en una ocasión, sino que al refugiarse en otras regiones deben verse sometidas al involucramiento en la violencia urbana.

Como particularidad debemos resaltar que las víctimas del departamento sobresalen por su intención de volver a los predios abandonados:²³ “Entre el año 1999 y el 2004, se han producido unos 20 retornos, involucrando a cerca de 10,000 personas. Estos retornos han sido posibles, por la política impulsada desde la Oficina de Gestión de paz, que ha liderado una acción institucional con administraciones locales, el ministerio público y organizaciones de cooperación internacional” (ELACID 2005, pág. 51).

Se identifica que las víctimas habían adquirido los predios con créditos del Banco Agrario o solicitados con el fin de mejorar las condiciones de vivienda y de igual manera para el emprendimiento de cultivos de productos como el lulo, café y maíz.²⁴ También se han involucrado entidades privadas como el Banco de Bogotá, y en cerca de 3 casos préstamos o proyectos vinculados a la Confederación de Cafeteros.

En julio de 2002, Diego tramitó un crédito por casi 6 millones de pesos con el Banco Agrario para desarrollar una plantación de lulo. Como garantía, el banco hipotecó el predio hasta tanto no pagaran la deuda. La familia comenzó con el proyecto y alcanzó a pagar dos cuotas del crédito hasta que en diciembre de 2004 los combates entre diferentes grupos armados desplazaron a la familia. Con el tiempo, perdieron la cosecha, los muebles y los electrodomésticos. (Verdad Abierta 2013, párr. 24)

Se encontró que en los casos relacionados con la masacre de Trujillo una de las víctimas, Mauricio Hernán Correa Acosta, retorno al predio que abandono en el año 1993 gracias a un proyecto de siembra de café del Comité de Cafeteros Departamental de Cafeteros. La víctima había decidido refugiarse en la ciudad de Cali hasta el año 2010, cuando la difícil situación económica lo obliga a regresar al predio. El Comité de Cafeteros Departamental, estaba liderando el proyecto de siembra de café, ante lo cual el señor

²³ En la mayoría de los casos encontraron sus predios abandonados y carcomidos por la maleza, teniendo en cuenta que en la zona norte entre 1998 y 2003 se abandonaron 859,9 Hectáreas.

²⁴ Las víctimas de la zona solicitaron créditos con diferentes organizaciones, de 10 casos reconocidos 4 corresponden al Banco Agrario mientras el restante a Bancos privados.

Mauricio Hernán Correa Acosta, vio la oportunidad para retornar a la vida del campo. Ésta persona adquirió un predio con el Banco de Bogotá, con la finalidad de renovar su siembra con 5.000 árboles de café. El crédito fue tramitado por intermedio del Comité de Cafeteros. (Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00005-00)

El retorno en algunos casos ni siquiera es considerado, pues el desplazamiento conlleva a una re configuración de la identidad del campesino, se quiebra la vinculación con la tierra. Es así como muchos no quieren retornar, no quieren volver a cultivar, sus hijos se quieren integrar a las dinámicas urbanas, quieren estudiar y trabajar, en últimas el campo ya no les interesa.

Por otro lado, hay quienes quieren retornar y no es posible debido a las condiciones de seguridad. En la zona la presencia de Rastrojos y Machos aún es fuerte. Es más, en las inspecciones de reconocimiento de terrenos la cual se hace con víctimas y autoridades públicas se ha conocido de personas que amenazan los retornos o que pretenden vigilar las pretensiones de las víctimas. “Desde que regresó (solicitante) al predio ha visto permanentemente en la zona la presencia de los “rastros” quienes se encuentran haciendo las mismas actividades de saqueo, indicando que cuando sale de la casa a hacer mercado, ellos entran a la casa, se roban la remesa, las ollas, las gallinas, los huevos, dañan las puertas.” (Sentencia:76-111 -31 -21 -002-2013-00016-00, pág. 3)

Pese a la desmovilización de los paramilitares a comienzos del Siglo XXI, los grupos BACRIM han continuado de manera constante las amenazas contra las acciones de restitución y los líderes campesinos:

Persisten las amenazas de los grupos armados contra los líderes comunitarios (...) Cuatro de estos líderes de organizaciones de víctimas han sido asesinados en el Valle en los últimos años. Las vidas de William Sánchez, Julio César Molina y Miller Cortes fueron apagadas en Tuluá, Ansermanuevo y El Cairo, respectivamente, por órdenes de las ‘BACRIM’ que operan en dichos municipios. (El Pueblo 2013, Párr 13)

Otro aspecto a tener en cuenta es el vínculo jurídico de las víctimas frente al predio que reclaman. Las sentencias de restitución revelan una serie de dilemas jurídicos respecto al régimen de propiedad. Se manifiestan contradicciones en lo referente a la calidad de las transacciones como las compraventas, y de igual manera el mal uso o la interferencia de los actores respecto de la aplicación de las normas de propiedad. Las condiciones “anómalas”

provocadas por la violencia dejan entrever el desarrollo inapropiado del régimen de propiedad o simplemente la debilidad del cuerpo institucional.

Uno de los inconvenientes recurrentes es la falta de claridad en la Escritura Pública. Se revela que las escrituras obedecen a la manipulación de los ciudadanos sin sujeción a los parámetros legales. Por ejemplo, el establecimiento de dos usufructos para un mismo bien lo cual no está permitido, lo anterior sucede con miembros de una misma familia.²⁵ Es recurrente encontrar que las víctimas tienen problemas de registro con sus predios. En algunos casos el proceso es realizado después del abandono del predio y bajo la condición de víctima. La condición cultural del escenario rural es determinante, pues así como los campesinos aseguran no vieron la necesidad de hacerlo o desconocen los procedimientos correspondientes. (Sentencia: 76-111-31-21-002-2013-00021-00)

También se revela la confusión respecto a la condición de propiedad, se mezclan las situaciones de posesión, arrendador y propietario. Los esquemas normativos no se acoplan de manera fácil a las condiciones de necesidad de las personas en determinado momento. Por ejemplo, en uno de los relatos la víctima realizó actos de señorío por más de 10 años, lo que implicaría la declaración de la prescripción extraordinaria, mas también se reconoció que había pagaba arriendo, gracias a un acuerdo logrado vía telefónica. (Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00043-00.)

En relación a las condiciones de tenencia de la tierra, las cifras departamentales reflejan un fenómeno complejo: al examinar el porcentaje de población desplazada que dice tener un vínculo con la tierra abandonada o despojada es menor que el porcentaje que en realidad puede llegar a demostrar el vínculo mencionado. El 92,3 % de los hogares desplazados reportaron algún tipo de tenencia, mientras que sólo el 7,7% manifestó no haber abandonado o no poseer tierras al momento del desplazamiento. Ahora bien, el 74.5% se declararon propietarios de las parcelas abandonadas, aunque sólo un 16% admite tener la respectiva escritura que lo acredita como tal. El 12.4% declararon tener posesión sobre la tierra, 5.1% ser arrendatarios, 2.9% propietarios colectivos y otro 2.9% eran colonos. (ELACID 2005)

²⁵ Según la sentencia referida la escritura pública estaba configurada de la siguiente manera: “El señor Alberto Gómez López, manifiesta: Que acepta la presente escritura de venta de nuda propiedad para sus nietos y a la vez constituye usufructo a su favor hasta el día de su fallecimiento” (Sentencia: 76-111-31-21-002-2013-00021-00)

A manera de conclusión, se configura una relación de doble sentido entre los derechos de propiedad y el conflicto armado. Primero, la debilidad en los mecanismos para proteger los derechos patrimoniales, considerando estos como una manifestación del Estado mismo, facilita la apropiación ilegal. Segundo, las acciones de grupos ilegales como paramilitares y guerrillas, conllevan al deterioro de las instituciones públicas, pues se mina la confianza de los pobladores. Ambos fenómenos son factores determinantes en la estrategia militar de los grupos paramilitares, es viable el ataque a las zonas con un detrimento público más alto, pues allí la resistencia institucional es menor y la lucha frente al enemigo ya sea ELN o las FARC generan un mayor daño.

3. DINÁMICAS DE CONCENTRACIÓN DE TIERRA EN EL VALLE DEL CAUCA

En el desarrollo de este trabajo se han mostrado las instituciones vinculadas con el régimen de propiedad legal, y las dinámicas de despojo y abandono que alteraron la tenencia de la tierra en la zona noroccidental del Valle del Cauca. Es menester de este capítulo identificar las dinámicas de concentración en la región, resaltando la transformación en el uso de la tierra y el papel jugado por el narcotráfico y los grupos armados.

3.1. Tendencias de concentración y derechos de propiedad

Como se ha visto, el conflicto armado interfiere de distintas maneras en la tenencia de la tierra. Las condiciones sociales y económicas propias del departamento juegan un papel central en estos procesos, es allí donde la concentración de tierra se manifiesta como un fenómeno perjudicial para el mejoramiento de las condiciones de vida. El departamento del Valle del Cauca presenta una concentración de propiedad del 0,91 (PNUD 2003) congruente a la tendencia nacional y siendo una de las más altas del país.

Como lo ha asegurado Absalón Machado no es posible realizar un análisis certero de la evolución de la concentración, pues aún hoy día hay imprecisiones en lo que respecta a las bases de datos del censo y catastro rural.

Es necesario hablar del modelo de distribución que se ha consolidado en el país. La estructura de tenencia bimodal que desde tiempos coloniales se ha desarrollado ha terminado por configurar amplios márgenes de desigualdad en el campo mismo y en comparación al país urbano.²⁶ Lo anterior repercute sobre los índices de productividad y sobre la soberanía alimentaria del país, pues fenómenos como el monocultivo terminan por afectar la estabilidad del mercado interno.

Siguiendo a Machado (1998) se puede ver como la tendencia es que la gran hacienda se extienda, la mediana se mantenga en su tamaño y la pequeña continúe fragmentándose. Para 1996, según la Escuela Latinoamericana de Desarrollo y

²⁶ Se suelen reconocer tres tipos de estructura agraria: 1. Unimodal, se da una baja concentración de la propiedad. La tierra se consolida como un bien productivo en la medida que hay igualdad en el uso tecnológico. 2. Multimodal, hay una baja concentración de tierra, pero la mediana propiedad es protagonista y se constituyen una serie de alianzas para no entrar en conflicto con la pequeña y gran propiedad con el fin de generar un aumento productivo y diversificado. 3. Bimodal, alta concentración y polarización de la tierra: minifundio y latifundio.

Cooperación, los predios más grandes (de más de 200 hectáreas) que correspondían al 2,8% del total de fincas, concentraban el 39,9 de la tierra. A la vez, las fincas más pequeñas (entre 0 y 5 hectáreas), que correspondían a 46,8% del total de predios, poseían sólo el 3,2% de la tierra. Estas tendencias son reafirmadas por el IGAC y el CORPOICA en el año 2002, de igual manera en el Atlas de distribución de la propiedad rural en Colombia del 2012.

A nivel departamental los procesos históricos juegan un papel determinante. En 1910 se constituyó de manera oficial el departamento del Valle del Cauca obedeciendo a los intereses de las elites locales, sobretodo de los grandes hacendados del café y la caña de azúcar. La estructura institucional funcionó como amalgama para el acoplamiento de tales intereses, los derechos de propiedad se zanjaron a favor de los ingenios y haciendas. Lo anterior da cuenta de la confabulación de las elites políticas y los grupos económicos.

El fenómeno de la concentración de tierras en el Valle está relacionado con alianzas familiares entre comerciantes de Cali e hijas de grandes terratenientes en el Cauca...Las personas que fueron ascendiendo vía comercio en Cali se casaron con las mujeres de Popayán, de familias muy prestantes. Muchos de estos comerciantes se hicieron dueños de grandes extensiones de tierra en el norte del Cauca y el sur del Valle. De hecho, así se puede explicar la gran concentración que hoy tienen los ingenios azucareros. (El Pueblo 2013)

A partir del S.XIX la propiedad en el área plana y de ladera fue monopolizada por los terratenientes regionales; luego se dio una recomposición en la tenencia de las haciendas que permitió el aumento en el número de propietarios. Pero de esto no se sigue que hubiera una atomización de la propiedad, pues los medios de producción agrícola seguían concentrados en pocas manos. La tierra aunque más fragmentada continuó en manos de unas cuantas familias. (Camacho 2012)

La concentración de tierra guarda una relación esencial con los derechos de propiedad y en el Valle del Cauca se han articulado con el objetivo de proteger los circuitos de capital: Primero, los dueños de las haciendas con sus esclavos y la explotación de la economía de café y oro; luego el café y los trapiches paneleros, y en la actualidad, 13 ingenios azucareros que controlan monopolícamente la producción de azúcar y productos químicos que se exportan a otros países. Sumado a la penetración de los grupos paramilitares y el poder económico y social del narcotráfico, la desigual distribución de la tierra ha determinado cambios en la economía y la demografía poblacional de los

vallecaucanos. Los dueños de las mejores tierras han permanecido distantes y protegidos. (Estrada 2010, pág. 4)

Siguiendo los registros del IGAC (2012) la gran (27%) y mediana (50%) propiedad son los elementos protagonistas en la estructura de propiedad en el departamento vallecaucano. La participación de los propietarios de pequeños predios ha incrementado, pero esto no ha representado un aumento significativo en el volumen del área por predio.²⁷ El departamento además de mantenerse con la concentración más alta desde el 2000 hasta el 2009, no presenta un incremento determinante en el número de propietarios y predios, el cual pasa del 8,317 al 8,245. Históricamente la variación entre número de propietarios y predios es menor en aquellas zonas donde se da un mayor rendimiento de producción y donde ya se han asentado los proyectos de inversión ya sean de tipo agrícola o minero.

3.2. Estructura de la propiedad agraria

La zona Norte del departamento presenta una concentración alta, pero de igual manera refleja un comportamiento irregular y disímil. Una mirada general indica que los índices de concentración de municipios como Bolívar (0,77) Trujillo (0,73), y Riofrio (0,82) se encuentran cercanos al promedio nacional que para el año 2005 fue del 0,86.

Trabajos como el desarrollado por Fernando Estrada (2010) coinciden en que el contexto de concentración de tierra en la región corresponde a una manifestación del conflicto armado, más que a un poder que tenga la capacidad de monopolizar la propiedad de las tierras. Es por esto que vale la pena decir que tal fenómeno se distancia de lo sucedido en las regiones del pacífico y del sur al interior del departamento. La zona noroccidental no ha tenido una tradición agroindustrial de gran escala como si lo tiene el sur

²⁷ En la actualidad, el Valle del Cauca se ha logrado mantener como el departamento con mayor concentración en el suroccidente del país, frente al Huila (0,78), Choco (0,86), Cauca (0,84) y Nariño (0,81); además desde el año 2000 al 2009 los índices de concentración aumentaron del 0,89 al 0,91 con un promedio de tamaño por predio de 10,98 Hectáreas. (IGAC 2012)

del departamento,²⁸ ni tampoco una cantidad de grupos reclamantes de títulos de propiedad colectiva como en la zona pacífico.²⁹

La evolución en la posesión de tierra ha variado en aspectos, tales como el tamaño promedio de los predios registrados y el número de dueños. En el año 1993, los predios entre 0 y 20 hectáreas constituyen el 83% del total (1.272) y el 82,1% de los propietarios, ocupando el 25,4% del área. Las propiedades de más de 1.000 hectáreas ocupaban el 9,1% del área (2.214,3 ha), correspondiendo al 0,1% de los predios (2) y el mismo porcentaje del número de propiedades. (CNR 2008).

Siguiendo el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Trujillo planteado por la Central de Cooperativas Agrarias, en la zona se presentan serios problemas de distribución de la propiedad rural que se encuentran ligados a las dinámicas de producción. Por ejemplo, en la zona oriente hay una alta concentración de tierra y un monopolio en el uso y repartición de agua, en la medida que están bajo el poder de los grandes terratenientes.

Si bien no se conocen muchos proyectos agroindustriales de gran escala en la zona se conoce la propiedad de más de 700 Hectáreas a manos de Smurfit Cartón de Colombia, las cuales se encuentran destinadas a la silvicultura. Las veredas involucradas en este proceso son Cristales, Dos Quebradas y Río Chiquito, hacia el municipio de Bolívar.

²⁸ Los índices más altos en el departamento se encuentran en aquellas zonas donde hacen presencia los proyectos agroindustriales, sobretodo proyectos como el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, ubicados en el sur donde en municipios como Candelaria y Palmira los índices de gini son del 0,90 y del 0,88.

²⁹ En el norte la propiedad se ha concentrado por fuerza del dinero del narcotráfico y la presencia de paramilitares y bandas criminales. En Buenaventura la estructura de la propiedad es un poco distinta a la tradicional porque allí hay un área inmensa que corresponde a propiedades colectivas de las comunidades negras reconocidas por la Ley 70 de 1993. En el Pacífico los propietarios han sido despojados por los varios actores armados que han estado durante estas décadas de conflicto. (El Pueblo 2013)

Tabla No. 1. Estructura de Propiedad en Trujillo 1993.

Rango Hectáreas	1993		
	N Predios	N Propietarios	Área Hectáreas
<1	266	310	86.0766
1 <3	230	379	44.4051
3 <5	310	568	2.231.6495
5 <10	165	337	2.025.6987
15 <20	79	141	1.354.2584
20 <50	162	256	4.903.1538
50<100	68	124	4.874.6764
100<200	20	52	2.747.5165
200<500	6	18	1.839.8673
500<1000	1	1	639.4125
1000 <2000	2	2	2.214.2794
>2000	S.I.	S.I.	S.I.
Total Municipal:	1.531	2.526	24.219.1504

Fuente: (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 2008, pág. 111)

Es importante resaltar que la zona evaluada presenta una estructura variada, caracterizada por una preponderancia de la gran y mediana hacienda, además de un aumento del número de propietarios. El Grupo de Memoria Histórica concuerda sobre esta estructura de tenencia disímil: “la estructura de propiedad en el año 1993 a partir de información suministrada por el IGAC, se conformaba por los predios entre 0 y 20 hectáreas que constituían el 83% del total (1.272) y el 82,1% de los propietarios, ocupando el 25,4% del área.” (CNR 2008, pág. 112).

Otra de las problemáticas que afecta la tenencia de la tierra es la proporción de tierra correspondiente a los pequeños propietarios, lo que denotaría una creciente fragmentación ante el número de nuevos propietarios. “Si bien la mayor participación en el número de propietarios y predios la tienen las fincas menores a 20 hectáreas, en área su participación es poco significativa, evidenciando de cierta manera una posible tendencia hacia la concentración de la propiedad.” (El Pueblo 2013)

Guiándonos por las sentencias de restitución y las narraciones de las víctimas, los predios sobre las cuales se hacen reclamaciones suelen estar divididos o incluidos sobre otros predios más grandes. La fragmentación se ocasiona por fenómenos como la división por procesos de sucesión o por la compra de porciones con el fin de establecer pequeños cultivos o una casa donde vivir. “En 1993 el número de predios era de 1.531 y el de propietarios ascendía a 2.526. En el año 2003, el total de propietarios era de 6.246 mientras el número de propiedades se había incrementado a 4.487. Varios fenómenos podrían haber incidido en este hecho.”³⁰ (CNR 2008). Al examinar los datos recolectados de las sentencias de restitución, en la mayoría de los casos los predios reclamados no superan las 20 hectáreas y se presentan 5 casos con predios con más de 100 hectáreas.

Sobre este punto vale la pena decir que se habla de concentración en la medida que la gran hacienda continua una expansión en su volumen, mientras la mediana hacienda mantiene su tamaño, pero la pequeña propiedad se ve afectada por el aumento de la fragmentación de los terrenos. Lo anterior termina por consolidar las condiciones de pobreza en la que viven los campesinos de la zona, y refleja la rigidez de la distribución territorial y sus consecuencias en las dinámicas de producción.

3.3. Transformación en el uso de la tierra en el Norte del Valle del Cauca

La agricultura es uno de las actividades determinantes en la economía de los tres municipios estudiados. “En términos generales, el municipio deriva su sustento del cultivo del café, plátano, sorgo y mora, así como el levante de ganado bovino, sin contar los ingresos derivados de actividades asociadas al narcotráfico difíciles de contabilizar en la producción económica local.” (CNR 2008, pág. 110).

Como prueba de la importancia de la agricultura para el año 2005 Trujillo destinaba 6.679 ha a los cultivos permanentes. La destinación de esos cultivos se da de la siguiente manera: frutales (703 ha); cacao (3 ha); café (5.978,1 ha); caña de azúcar (116,3 ha); caña

³⁰ Dentro de los fenómenos determinantes en este proceso se considera: la subdivisión y nuevo registro notarial de propiedades susceptibles de juicios de sucesión y el fraccionamiento o des englobe de fracciones de predios para la compra-venta. Nuevos predios en los estudios catastrales ligado este proceso a dinámicas de actualización catastral. Finalmente, la significativa influencia del narcotráfico y el uso del testaferrato, el cual posibilita la titulación aparente de predios a múltiples dueños, incluso con un mismo predio.

panelera (40 ha) y plátano intercalado con café (690 ha) en cultivos transitorios se destacaba la producción de frijol con 25 ha; el maíz de zona plana (68,6 ha); el maíz de ladera (89,5ha); en raíces, bulbos y tubérculos se destinaron 58 ha. (IGAC 2012)

La producción de los productos mencionados dentro de los propios predios fue la fuente principal de subsistencia de los reclamantes en los procesos de restitución. Estas personas debieron abandonar tales trabajos y al intentar retornar encontraron sólo maleza y rastrojo. Así como lo afirma Ana María Ibáñez (2004 citado por CEPAL 2009, pág. 12) el desalojo de la población civil responde a “estrategias de guerra adoptadas por los grupos armados para desocupar el territorio, expandir sus áreas de control y apropiarse de manera violenta de propiedades agrícolas.”

Tabla No.2. Distribución del Uso de la Tierra en Trujillo.

Distribución de Áreas	Hectáreas	%
Pastos Naturales	10693	37.3
Bosque Natural	2390	8.4
Cultivos Permanentes	7363	25.7
Zona Plana	1113	3.9
Rastrojo	612	2.1
Bosque Plantado	488	1.7
Zona Urbana	67	0.2
Total Información	22727	79.3
Sin Información	5915	20.7
Total Area del Municipio	28642	100.0

Fuente: (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 2008, pág 108)

El desplazamiento de los campesinos tiene una consecuencia evidente y es la disminución en las hectáreas cultivadas y la mano de obra empleada para la agricultura: “Al

comparar las ocupaciones antes y después del desplazamiento, se aprecia que es la agricultura la actividad que registra una reducción más drástica (- 14 puntos porcentuales), pasando de representar el 45.6% de la ocupación total antes del desplazamiento a 31.1% después de la expulsión.” (ELADI 2005, pág. 164)

El desplazamiento conlleva una destrucción del nicho social y una difícil separación de los arraigos culturales con la tierra. El campesino debe integrarse a la sociedad bajo una nueva condición y es la de víctima, esto en muchas ocasiones conlleva al abandono total de la agricultura: “él (desplazado por Rastrojos) le cogió temor al campo, además ya tiene una vida organizada en la ciudad de Cali, su hijo mayor expresa que no le gustaría vivir en una finca, pues aún recuerda lo vivido en el predio, que ahora lo que quiere es estudiar y buscar otra forma de vivir.” (Sentencia: 76-111-31-21-002-2013-00029, pág.7)

En la zona las inversiones escasean pues los costos de producción son muy altos ante la incapacidad de comercializar los productos, la infraestructura es deficiente y no hay asistencia técnica ni crediticia para los cultivos. Respecto del tamaño de las explotaciones agrícolas las diferencias se presentan de la siguiente manera, el tamaño promedio de hectáreas por zona por familia es: para la zona oriente 0.5 Ha, la zona Centro 3.0 Ha, y en la zona Occidente 4,1 Ha. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Corporación Colombia Internacional 2012)

Las veredas en la región se caracterizan por el cultivo de café y plátano a manos de pequeños parceleros, además de amplias zonas abandonadas en su gran mayoría carcomidas por el rastrojo. Actualmente el jornal se ha configurado como el dispositivo de empleo recurrente para la mayoría de campesinos.

Carmen ha guardado silencio, quizás porque de tanto miedo la dejó sin palabras. Su esposo había comprado una parcela de 13 hectáreas en 1977, en la que cultivaban mora, tomate de árbol, lulo y hortalizas (...) Con un machete quitó la maleza y le mostró al juez cuáles eran los linderos de su finca (año 2012). Encontró una casa agrietada, con un colchón viejo y rastros de que grupos armados se habían instalado allí. Habían transcurrido ocho años. (CNR 2008, pág. 121)

El poder coercitivo del narcotráfico se relaciona de diferentes maneras con las actividades económicas de los pobladores. En la medida que se pretende ejercer un control territorial el cultivo y aprovechamiento de los mismos no es una prioridad. La propiedad es

usada como instrumento operativo en las acciones del narcotráfico, se pretende generar zonas de protección para el transporte de cocaína y en menor medida su cultivo.

La estrategia de acción alteró el mercado de tierras, el miedo causado en los propietarios hizo que estos quisieran vender sus tierras aceptando cualquier oferta. Los narcotraficantes aprovecharon la situación y compraron predios a muy bajo costo. Así lo ejemplifican los relatos de las víctimas:

Desde que yo estoy aquí si, por ejemplo, por allá por Venecia, Salónica, Andinapolis, son de Diego Montoya, pero no sea apropió sino que las compro. Desconozco que se haya apropiado el narcotráfico por medio de intimidar. Si sé que el conducto regular, entre comillas, diplomáticamente y algunas autoridades a través de la historia de Trujillo han contemporizado [...] es decir, déjeme meterme aquí en la casa y yo les doy sus 30 millones [...] También en Riofrio, Roldanillo, Dovio, El Águila, todo esa región, eso está contaminado. (CNR 2008, pág. 121)

La oleada de violencia y el deterioro en las dinámicas de producción dejaron como resultado la transformación en la distribución de la propiedad rural. Los propietarios debieron abandonar sus predios o fueron despojados de los mismos, el uso de los terrenos para cultivo y comercialización de drogas termino por convertirlos en arrendatarios o simples administradores. Así lo muestran artículos periodísticos y sentencias de restitución de tierras: “El arraigo por la zona y la facilidad para mimetizar su actividad hicieron de las 20.000 hectáreas del corredor natural, un escenario perfecto para el cultivo, producción y transporte de coca.” (El País 2003, párr. 6)

Algunos testimonios hablan de la instalación de haciendas lujosas donde residían los capos del narcotráfico:

Lo interesante allá es dominar el territorio, es la posibilidad de que pueda servir como corredor porque cultivos no hay. En la zona baja el interés era comprar fincas, unas fincas cafeteras muy grandes con el interés de ser propietarios de ese sitio, donde lo que hacían era montar unas haciendas lujosísimas, con piscinas [...] La zona de Salónica está prácticamente en manos de estas personas que llegaron y en forma violenta se apropiaron de esas tierras, pero en la zona de Chuscales, arriba, lo que querían era evitar la presencia de otra gente que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Sí, es el corredor por donde entra y sale mucha cosa, tiene acceso directo al mar, por ahí entran muchas armas y por ahí sale mucha coca. (CNR 2008, pág. 128)

Desde la perspectiva campesina estas incursiones del narcotráfico terminaron por hacer parte del diario vivir, sin que el aparato institucional tuviera la capacidad de interferir. “La única finca donde uno escucha que le dan trabajo a todo el mundo, mujeres y hombres, es donde Los Rastrojos o donde Los Machos, que le pagan ochocientos, un millón cien;

entonces ese es el único trabajo que hay, la gente va cogiendo pa' allá. Aquí el problema es que no hay en que trabajar.” (El País 2013, párr. 10)

Siguiendo al profesor Guido Germán Hurtado el reto rural en el departamento es complejo pues, no sólo se debe trabajar en la ejecución de políticas distributivas sino también en la democratización de los medios de producción, en este aspecto juega un papel fundamental los esquemas de inclusión social y las cooperativas campesinas. El municipio de Trujillo es fiel muestra de este proceso, pues durante las masacres cometidas los líderes campesinos fueron un blanco recurrente de los narcotraficantes y paramilitares.

La violencia también tuvo como objetivo los procesos sociales por democratizar y brindar esquemas de producción para los campesinos. En el municipio de Trujillo las masacres cometidas por los grupos paramilitares, bajo órdenes de los narcotraficantes, tenía como intención la destrucción de las redes cooperativas, para esto asesinaron a líderes campesinos como el padre Tiberio e impidieron el desarrollo de las asociaciones campesinas.

En la región se promovieron diferentes agrupaciones y proyectos como la Junta Municipal de la ANUC, de igual manera hicieron presencia organizaciones como la FANAL. En las zonas rurales de RioFrío y Bolívar se gestaron los proyectos más estructurados y ambiciosos. La Iglesia Católica jugó un papel determinante en la construcción de los andamiajes cooperativos, el padre Tiberio asesinado cruelmente revela un trabajo de más de una década por diferentes diócesis en la región.

La debilidad institucional ante la presencia de paramilitares y narcotraficante ha configurado la distribución territorial. La tierra adquirió un nuevo valor, pues no es considerada un mecanismo de producción sino un símbolo de poder. Esta premisa ha marcado el levantamiento campesino y las lógicas de acción de los actores del conflicto. La propiedad rural se aprecia como riqueza acumulativa de los individuos y no como factor de producción, adquiriendo un poder no solo social sino político (CGN 2005).

En este orden de ideas la redistribución territorial termina por aislar a las zonas más afectadas por el conflicto, zonas como la región noroccidental. La dinámica de movilización de la tierra en el Valle del Cauca refleja la instrumentalización de la misma, el crecimiento constante por parte de las grandes haciendas y el cruel conflicto por parte de los narcotraficantes y los grupos al margen de la ley. De hecho, se ha comprobado que

cerca del 51 % de las transferencias de grandes predios se realiza por presiones violentas (Reyes 2011). El uso de la tierra no obedece a la necesidad económica de un grupo poblacional, sino a las estrategias de control territorial dispuestas para el tráfico de estupefacientes.

CONCLUSIONES

Las variables institucionales que permitieron un aumento en la concentración de tierra en el norte del Valle del Cauca nacen de la ambigüedad en el régimen de propiedad. En este sentido ambigüedad se define como la confusión generada al no existir un único proceso de formalización que unifique los trámites legales.³¹ La ambigüedad se configura en un fenómeno multidimensional que desde una visión institucional obedece a fallas en la participación, estabilidad, efectividad y legitimidad. Así pues se debe hablar de: un acceso restringido a las instituciones; la complejidad con que se desarrollan los diferentes procesos de formalización; los altos costos y demoras en los trámites legales; la inexistencia de un espíritu de redistribución y protección.

La informalidad de la propiedad facilitó el robo de tierras y a su vez, dificulta la devolución a sus dueños legítimos. A partir de los relatos de las víctimas se evidencia que los campesinos no tienen información concreta sobre el vínculo jurídico con su predio, pues las transacciones obedecen a la necesidad y en su mayoría no se acoplan a los requerimientos legales. Al no existir un único proceso de reconocimiento legal y antes los altos costos y demoras no se da el registro de las transferencias o arreglos sobre predios.

Bajo el conflicto armado las fallas institucionales se intensifican y terminan por perjudicar en mayor medida a los campesinos. En este sentido se comprueba que los procedimientos establecidos desde la normatividad civil son, en muchas ocasiones, usados con el fin de despojar a los propietarios legítimos. El uso de notarios para el reconocimiento de escrituras públicas además de la aplicación de figuras jurídicas como la prescripción adquisitiva termina por afectar la protección de los predios rurales.

Los actores armados en la región norte del Valle del Cauca responden a dos motivaciones básicas: primero, generar una zona de control que les permita una ruta de tráfico de drogas, además del dominio de territorio frente a otros grupos ilegales; segundo, la necesidad de obtener recursos que financien su estructura operativa. De lo anterior se sigue que el despojo y el abandono se configuran como herramientas de control social. En últimas la apropiación de los predios rurales hace parte de la estrategia militar.

³¹ El proceso de formalización es una restricción esencial para generar confianza y seguridad jurídica, ya que mediante este se da el registro y saneamiento de los títulos de propiedad.

Si bien dentro de los casos examinados la mayoría corresponden a abandonos causados por las condiciones de violencia, se deben resaltar que los mecanismos de despojo obedecieron a la ocupación física y al empleo de amenazas. Es de resaltar las acciones emprendidas por el narcotraficante Henry Loaiza, “El Alacrán”, y su compañía fachada: “Sociedad Loaiza Díaz y Compañía”, quien forzaba la firma de propietarios legítimos para luego registrarla ante notarios cómplices.

La protección patrimonial de los campesinos es débil ante el uso de la fuerza. Así pues, se configura una relación de doble sentido entre el régimen de propiedad y el conflicto armado. Primero, la debilidad en los mecanismos para proteger los derechos patrimoniales, considerando estos como una manifestación del Estado mismo, facilita la apropiación ilegal. Segundo, las acciones de grupos ilegales como paramilitares y guerrillas, conllevan al deterioro de las instituciones públicas, pues se mina la confianza de los pobladores. Ambos fenómenos son factores determinantes en la estrategia militar de los grupos paramilitares, es viable el dominio en zonas con un detrimento público más alto, pues allí la resistencia institucional es menor.

Los campesinos debieron sufrir el nacimiento de los grupos BACRIM, gracias al enfrentamiento entre Wilber Varela y Diego Montoya, lo que ha dejado una amplia secuela de violencia en la región que amenaza el proceso de restitución de tierras. Son continuas las amenazas a quienes deciden retornar y a los procesos campesinos colectivos.

En relación a las dinámicas de concentración se debe decir que se reconoce un aumento en la participación de propietarios, sobretodo dentro de la categoría de pequeños predios. Pero lo anterior no ha conllevado a un aumento del tamaño por propiedad. Para explicar esta situación se puede hablar de las actualizaciones prediales, las fragmentaciones generadas en razón de procesos de sucesiones o de las transacciones informales, la mayoría de ellas con el fin de obtener recursos y pagar deudas. También es determinante la cantidad de ocupantes sobre bienes abandonados y el número de propietarios aparentes.

Como bien lo explica Harvey la liberación de una gran cantidad de bienes, en este caso gracias a la acción armada, termina por generar una re distribución geográfica; en el Valle del Cauca se puede hablar del aislamiento y de la concentración de los medios de producción.

BIBLIOGRAFIA

Capítulos de libros

Área de Memoria Histórica Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Línea de Investigación Tierra y Conflicto (2009). Concepto de despojo, Fines y Efectos Perseguidos. *El despojo de tierras y territorios. Aproximación Conceptual* (págs. 19-73). Bogotá: Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). Segunda parte: el tiempo presente (1991 – 2012). *“Patrones” y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca.* (págs. 223-478) Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Centro Nacional de Memoria Histórica. Obtenido en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/patronesyCampesinos/patrones-y-campesinos-tierra-poder-violencia-valle-del-cauca-insertos-baja.pdf>

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR]. (2008). La memoria, el olvido y la impunidad. *Trujillo. Una tragedia que no cesa. Primer Informe de Memoria Histórica de la Comisión* (págs. 173-229). Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S. A. Obtenido de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2008/informe_trujillo.pdf

Escuela Latinoamericana de Desarrollo y Coperación (2005). Efectos Economicos del desplazamiento. *Efectos Económicos del Desplazamiento Forzado en Colombia: Departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca 1997-200* (págs. 64-197). Cartagena.: Universidad de San Buenaventura de Cartagena. Disponible en: http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/845/1/Efectos%20Economicos_Dewin%20Perez_USBCTG_2005.pdf

Harvey, D. (2003). Acumulación por desposesión. *El nuevo imperialismo* (págs. 111-138). Madrid: AKAL.

Instituto Geografico Agutín Codazzi [IGAC] (2012). Valle del Cauca. *Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia* (págs.407-419). Bogotá. Imprenta Nacional. Disponible en: http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_la_evolucion_historica_con_cubierta_1.pdf?MOD=AJPERES

Nohle, D. (2009). Contextos, instituciones y actores políticos: Dieter Nohlen y el estudio de las instituciones políticas en América Latina. *El institucionalismo contextualizado en el análisis y diseño institucional* (págs. 2-36). México D.F: Editorial Porrúa. Disponible en: http://www.nohlen.uni-hd.de/es/doc/institucionalismo_introduccion.pdf

North, D. (1990). Institutions. *Institutions, institutional change and economic performance* (págs 3-61). Cambridge: Cambridge University Press.

Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2003). Las interacciones estratégicas: carteles, mafias y grupos armados irregulares. *Dinámica reciente de la Violencia en el Norte del Valle del Cauca* (págs. 23-31). Bogotá: Vicepresidencia de la República. Disponible en: http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/nortedelvalle.pdf

Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2003). La implementación de la violencia: entre el control y la competencia. *Dinámica reciente de la Violencia en el Norte del Valle del Cauca* (págs. 31-49). Bogotá: Vicepresidencia de la República. Disponible en:

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/nortedelvalle.pdf

Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (2013). Colombia, un país de concentración de tierras. *Tierra en Colombia, entre despojo y negocio. Presentación de la situación actual de una problemática al centro del conflicto* (págs.4-9). Bogotá. Disponible en: <http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/666329106.pdf>

Peters, G. (1999). Viejo y nuevo Institucionalismo. *El Nuevo Institucionalismo* (págs. 13-45). Madrid: Gedisa Editorial

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2003). Orígenes de la guerra en la periferia. *El conflicto, callejón con salida Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia* (págs. 19-45). Bogotá. Disponible en: <http://usregsec.sdsu.edu/docs/UNEIConflicto.pdf>

Superintendencia de Notariado y Registro. (2013). Decretos. *De la Protección y Restitución de Tierras* (págs. 63-63). Bogotá: Ministerio de Justicia y Derecho. Disponible en : <https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/DelegadaTierras2013/Publicaciones/De%20la%20proteccion%20y%20el%20registro1.pdf>

Rengifo, M. (2011). La concepción de la propiedad en el Derecho civil clásico y sus consecuencias sociales. *Teoría General de la Propiedad*. (págs. 5-34). Bogotá: Temis.

Reyes, A. (2011). El poder del narcótráfico y su aporte a la violencia en Colombia. *Guerreros y Campesinos El despojo de la tierra en Colombia* (págs. 73-81). Bogotá: Norma.

Tenera, F. (2007). Estudio de los derechos reales. *La realidad de los derechos reales*. (págs. 22-41). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

Publicaciones periódicas académicas

Albán, Á. (2011). Reforma y contrarreforma agraria en Colombia. *Revista de Economía Institucional*, 13 (24), 327-356. Disponible en: <http://www.economiainstitutional.com/pdf/no24/aalban24.pdf>

Estrada, F. (2010) Estrategia y Geografía Política del Conflicto Armado en el Valle del Cauca. *Análisis político*, (69), 35-57.

Hernández, B. (2011). La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia. *Verba Iuris*, (25), 63-83. Disponible en: <http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/25/la-tenencia-de-la-tierra-y-la-reforma-agraria-en-colombia.pdf>

Peña Huertas, et al. (2014). La regulación agraria en Colombia o el eterno déjà vu hacia la concentración y el despojo: un análisis de las normas jurídicas colombianas sobre el agro (1991-2010). *Estudios Socio-Jurídicos*, 16 (1), 123-166. Disponible en: doi: dx.doi.org/10.12804/esj16.1.2014.03

Uribe Kaffure, S. (2013). Transformaciones de tenencia y uso de la tierra en zonas del ámbito rural colombiano afectadas por el conflicto armado. Aproximación desde un estudio de caso. *Estudios Socio-Jurídicos*, 16(1), 245-287. Disponible en: doi: dx.doi.org/10.12804/esj16.1.2014.06

Romero, M y Arias, A. (2008). "Bandas Criminales", Seguridad Democrática y corrupción. En *Arcanos*, (14), 40-51. Disponible en: http://www.arcoiris.com.co/wpcontent/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_14.pdf

Publicaciones periódicas no académicas

La masacre de Riofio volver a los rostros del olvido. (2003, 11 de marzo). El País.

Un Viaje al Cañon de la Mafia. (2007, 20 de agosto). El País. Disponible en:
<http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto202007/nac01.html>

El gran problema de la distribución de la tierra en el valle del Cauca. (2010, 31 de diciembre).El Pueblo. Disponible en: <http://elpueblo.com.co/el-gran-problema-de-la-distribucion-de-la-tierra-en-el-valle-2/>

Trujillo una tragedia que no cesa. (2013, 20 de julio). El Pueblo. Disponible en:
<http://elpueblo.com.co/trujillo-una-tragedia-que-no-cesa>

Avanza proceso de restitución de tierras en Trujillo, Valle del Cauca. (2013, 31 de julio). El Pueblo. Disponible en: <http://elpueblo.com.co/avanza-proceso-de-restitucion-de-tierras-en-trujillo-valle-del-cauca/>

El problema de los baldíos en Colombia, un asunto sin resolver. (2014, 16 de mayo). Las2Orillas. Disponible en: <http://www.las2orillas.co/el-problema-de-los-baldios-en-colombia-un-asunto-sin-resolver/>

Bloque Calima. (2009). Verdad Abierta. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/826-bloque-calima>

Las leyes agrarias no se han aplicado en serio: Jennifer Mojica. (2013, 28 de septiembre). Verdad Abierta. Disponible en:
<http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/4895-las-leyes-agrarias-no-se-han-aplicado-en-serio-jennifer-mojica>.

La llegada de las Auc al Valle y Cauca, según varios desmovilizados. (2012, 12 de octubre). Verdad Abierta. Obtenido de: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/2983-paramilitares-contaron-como-llegaron-las-auc-al-valle-y-cauca>

Bolívar, un pueblo del Valle azotado por los violentos. (2013). Verdad Abierta. Obtenido de: <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/4966-bolivar-un-pueblo-del-valle-azotado-por-los-violentos>.

Fallan primera restitución de despojado por ‘El Alacrán’ en Valle del Cauca. (2014, 14 de abril). Verdad Abierta. Disponible en: <https://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5318-fallan-primera-restitucion-de-despojado-por-el-alacran-en-valle>

Con tierras de narcos compensan a campesinos en el Valle. (2014, 19 de octubre). Verdad Abierta. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5474-tierra-y-paz-en-la-agenda-de-valle-del-cauca>

Otras publicaciones:

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional [Acción Social]. (2009). Consideraciones para la formalización de la tenencia de bienes inmuebles en zonas de reserva forestal Ley 2/59. Bogotá: Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Disponible en: http://www.restituciondetierras.gov.co/media/descargas/publicaciones/consideraciones_formalizacion.pdf

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional [Acción Social] (2010). Del abandono al despojo: De cómo se han afectado los derechos patrimoniales de las víctimas del desplazamiento forzado, según sus declaraciones para el proceso de Justicia y Paz. Bogotá: Proyecto Protección de Tierras y

Patrimonio de la Población Desplazada. Disponible en:
http://www.restituciondetierras.gov.co/media/descargas/publicaciones/abandono_de_spojo.pdf

Camacho, J. C. (2012). *Apropiación de tierras baldías en el departamento del valle del cauca, 1910-1920: una mirada micro*. (Tesis de Pregrado). Disponible en:
Universidad del Valle.

Comisión Económica Para América Latina Red de Desarrollo Agropecuario [CEPAL]. (2001). Colombia: Alcances y lecciones de experiencia con su reforma agraria. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Obtenido de
<http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4493/S019751.pdf?sequence=1>.

Franco, N. (2014). Legitimidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la América Latina del Siglo XXI: Validación del constructo a partir de los nuevos estándares y demandas sociales. Bogotá: Universidad de los Andes. Disponible en:
http://www.lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/ISTR2013/natalia_franco_borrero.pdf

Iris, M. (2008). *Monografía Político Electoral. Departamento del Valle del Cauca. 1997-2007*. Bogotá: Universidad de los Andes. Disponible en:
http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/vdelcauca.pdf

Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Guadalajara de Buga. 2013, 21 de noviembre. Sentencia: 76111312100120120002000

Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras Guadalajara de Buga. 2013, 15 de agosto. Sentencia: 761113121002-2013-00004-00

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Guadalajara de Buga. 2013, 30 de septiembre. Sentencia: 76-111 -31 -21 -002-2013-00016-00.

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Guadalajara de Buga. 2013, 7 de octubre. Sentencia: 76-111-31-21-002-2013-00021-00

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Guadalajara de Buga. 2013, 21 de noviembre. Sentencia: 76 111 31 21 002 2013 00028 00.

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Guadalajara de Buga. 2013, 12 de diciembre. Sentencia: 76-111-31-21-002-2013-00029

Juzgado Tercero Civil Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Guadalajara Buga. 2013, 31 de junio. Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00005-00.

Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Guadalajara de Buga. 2013, 20 de agosto. Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00016-00

Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado En Restitución De Tierras Guadalajara De Buga. 2013, 11 de septiembre. Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00019-00.

Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado En Restitución De Tierras Guadalajara. 2013, 13 de septiembre. Sentencia: 76-111-31-21-002-2013-00021-00

Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Guadalajara de Buga. 2013, 23 de septiembre. Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00017-00.II.

Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado En Restitución De Tierras Guadalajara De Buga. 2013, 30 de septiembre. Sentencia: 76-111-31-21-003-2013-00025-0.

Ley 160 de Regulación Agraria (1994). República de Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Disponible en: http://www.incoder.gov.co/documentos/Ley160_2004.pdf

Ley 975 de Justicia y Paz (2005). República de Colombia. Disponible en: <http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wpcontent/uploads/2012/05/Compilaci%C3%B3n-Normativa-2010.pdf>

Machado, A. (1998). Tenencia de tierras, problema agrario y conflicto. Disponible en: <http://www.piupc.unal.edu.co/catedra01/pdfs/AbsalonMachado.pdf>

Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad (2014) Cartilla de Baldios. Obtenido de: <http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2013/07/CARTILLA-BALDIOS.pdf>

Pons-Vignon, S. L. (2004). "Land, violent conflict and Development.". Working Paper no. 233. París: Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponible en: <http://www.oecd.org/dev/29740608.pdf>

Sanchez, F. (2007.). Conflictos de tierras, derechos de propiedad y el surgimiento de la economía exportadora en el siglo xix en colombia. Bogotá: Centro de Estudios Internacionales sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.

Secretaría de Salud del Valle (2012). Información Epidemiológica de los Desplazados en Valle. Cali: Secretaría de Salud del Valle. Disponible en <Http://www.disaster-info.net/desplazados/documentos/sdsvalle/Capitulo1.htm>

Thoumi, F. (1995). Derechos de Propiedad en Colombia: debilidad, ilegitimidad y algunas implicaciones económicas. Bogotá: Centro de Estudios Internacionales sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.

ANEXOS

Anexo 1. Condiciones de Formalidad e informalidad. Noción y sustento Jurídico.

	Definición	Prueba	Acciones de protección:
Propietario.	<p>Es la persona que tiene la facultad de disponer de un bien, y de usarlo y/o gozarlo directamente o de designar a otro para que lo use y goce, siempre y cuando estas facultades no se ejerzan en contra de la ley o de derechos ajenos.</p>	<p>Con el certificado de tradición y libertad emitido por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del círculo registral al que pertenece el inmueble. En este documento aparece identificado el titular del derecho de propiedad, que puede ser una persona natural o jurídica (de derecho privado o público); también contiene la información básica del inmueble sobre el que se ejerce el derecho.</p>	<p>legislación civil: Acción reivindicatoria o acción de dominio que se utiliza cuando un predio ha sido ocupado por una persona pero sin el consentimiento del propietario. A través de esta acción el propietario solicita ante un juez el retiro de quien está en su predio y el restablecimiento de su derecho a disfrutar del mismo.</p> <hr/> <p>Legislación penal: El Código Penal en el título séptimo, capítulo séptimo “De la Usurpación”, consagra mecanismos para la protección de las tierras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 261: sanciona a la persona que con el fin de apropiarse de una parte o de todo un predio, o de sacar provecho de él, modifique o quite las señales que lo limitan o alinderan. • Artículo 263: sanciona a la persona que invade tierras o edificaciones ajenas con el fin de obtener beneficios para sí o para un tercero. La pena será más grave, cuando los terrenos invadidos son rurales. • Artículo 337: sanciona la invasión de áreas de especial importancia ecológica y señala que la persona que invada reservas forestales, terrenos de propiedad colectiva o área protegida, definidos en la ley o reglamento será sancionada con prisión. <p>En el mismo sentido, el capítulo III del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 97: prohíbe a las personas vinculadas a un proceso penal, enajenar o vender bienes sujetos a registro, porque pueden ser utilizados para indemnizarlos perjuicios causados por el delito. Artículo 101: suspende y cancela los registros obtenidos ilegalmente o con fraude.

			<p></p> <p>Acciones en el derecho policivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por ocupación de hecho: previsto en la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930 reglamentario del artículo 15 de la misma ley. Mediante esta figura el propietario que es privado de la tenencia del bien puede solicitar al inspector de policía que le restituya la tenencia. • Medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales establecidas en el Decreto 747 de 1942. Además de aquellas consagradas en los códigos de policía a nivel departamental. <p>Acciones en el marco de la Ley 387 de 1997:</p> <p>Cuando el propietario de un predio es desplazado podrá acercarse ante el Ministerio Público o al Incoder y solicitar que éste sea incluido en el Registro de los Predios Rurales Abandonados por la Violencia (RUP). De esta manera se aplica la medida de protección consagrada en el artículo 19 de la misma ley, que establece:</p> <p>“El Incoder llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia e informará a las autoridades competentes para que procedan impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos”.</p> <p>En este caso el Incoder deberá informar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos acerca del ingreso del predio al RUP, con el fin de evitar que sea vendido transferido en contra de la voluntad del propietario.</p> <p>DECRETOS REGLAMENTARIOS: DECRETO 2569 de 2000. DECRETO 951 DE 2001. DECRETO 2562 DE 2001. DECRETO 2007 DE 2001. DECRETO 1660 DE 2007 DECRETO 250 de 2005</p> <p>b. Acciones en el marco del Decreto 2007 de 2001: Cuando una comunidad rural es afectada por el inminente riesgo o la</p>
--	--	--	--

			<p>ocurrencia del desplazamiento, puede acudir ante el Comité de Atención Integral a la Población</p> <p>Desplazada para que la zona sea declarada como tal y se pongan en marcha las medidas de protección a través de las cuales los propietarios solo podrán vender sus predios con la autorización del Comité.</p>
	<p>Colectiva: es aquella que los grupos étnicos, en su conjunto, ejercen sobre el territorio. Implica las facultades para servirse del territorio y obtener sus frutos, y para oponerse a la intervención de terceros ajenos a las comunidades. Se diferencia de la individual, en que los propietarios colectivos no pueden disponer del territorio común, ya que carecen de la facultad para enajenar o transferir el dominio, limitarlo o gravarlo. tomado de guía azul.</p>	<p>Certificado de Tradición y Libertad emitido por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en donde aparece el nombre del propietario, que puede ser: una persona natural, una sociedad, un resguardo indígena o un consejo comunitario.</p>	<p>RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA:</p> <p>Mediante un procedimiento que consta de siete pasos que deben seguir los Comités Departamentales o Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada, en colaboración con otras entidades públicas comprometidas con el tema (Incoder, IGAC o Catastros descentralizados, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Notarías, etc.). Estos pasos son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Convocatoria del Alcalde, el Gobernador o la Acción Social a una reunión del comité, cuando se presentan hechos que puedan causar o hayan causado un desplazamiento forzado. 2. Análisis de la situación de orden público en la zona afectada, como requisito previo para decidir si se emite o no una declaratoria de inminencia de riesgo o de desplazamiento forzado por la violencia. 3. Determinación de la zona rural que será objeto de declaratoria. 4. Expedición del acto administrativo de declaratoria. 5. Elaboración del Informe de Predios Rurales, necesario para establecer las calidades de derechos que, sobre la tierra o el territorio, tienen las personas afectadas. 6. Emisión del acto administrativo por medio del cual se avala el Informe de Predios Rurales. 7. Levantamiento parcial o total de la declaratoria, cuando el comité considere que las condiciones de orden público han variado favorablemente en la zona.
Poseedor.	<p>Poseedor civil: Es la persona que usa y goza con ánimo de señor o dueño un bien determinado (Art. 762 y 2528 del Código Civil).</p>	<p>Se demuestra a través de documentos, testimonios, inspección ocular o cualquier otro medio legal de prueba que evidencie los actos materiales propios de dueño que se han realizado sobre el predio, tales como pago de servicios públicos, pago de impuesto predial, contratos de arrendamiento en que el poseedor obre como arrendador, actos de explotación o cualquier otra actividad demostrativa de la vinculación directa con el bien. Se puede acudir libremente a cualquier medio probatorio.</p>	<p>Legislación Civil:</p> <p>Artículo 972: define las acciones posesorias como aquellas que tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de los bienes inmuebles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 982: permite a la persona injustamente privada de la posesión, solicitar la restitución del bien con indemnización por los daños causados. • Artículo 984: ofrece la posibilidad de restitución de las cosas, tal y como se encontraban antes de la privación originada por la violencia. <p>Legislación Penal:</p> <p>Las acciones previstas en el capítulo séptimo, título VII, del Código Penal (Ley 599 de 2000) se aplican para la protección de la posesión así: El artículo 261 sanciona la usurpación de tierras; el artículo 263 impone</p>

			<p>penas por la invasión de tierras y edificaciones, el artículo 264 condena la perturbación de la posesión sobre inmuebles y el artículo 265 hace referencia al daño en bien ajeno, como por ejemplo destruir, inutilizar, desaparecer o dañar bien ajeno, mueble o inmueble.</p>
	<p>Poseedor hereditario:</p> <p>Es la persona a quien la ley llama a recibir la herencia desde que fallece el causante de cuya sucesión se trata (Art. 1013 del C.C.); en el momento de la muerte del causante, la posesión de la herencia queda en cabeza del heredero (Art. 757 del C.C.); sin embargo ello no lo faculta para disponer (enajenar, vender, ceder, regalar, etc.) de los inmuebles que hacen parte de la sucesión.</p>		<p>Acciones en el derecho policivo:</p> <p>El Código Nacional y los Códigos Departamentales de Policía contemplan como unas de sus acciones ordinarias, la protección de la posesión o tenencia, buscando la preservación del derecho del poseedor cuando se le ha perturbado y restableciendo la situación como se encontraba antes de presentarse los hechos de perturbación.</p>
	<p>Poseedor inscrito:</p> <p>Figura que el Código Civil establecía para la inscripción en el Registro no solo de la propiedad de inmuebles sino también de la posesión; sobre ellos desde la expedición del Decreto 1250 de 1970 (actual estatuto de Registro), no es posible abrir nuevos folios para registrar posesiones, sin embargo, aquéllos abiertos para posesión de inmuebles bajo el antiguo sistema de Registro, continúan activos. En</p>		<p>Acciones en el marco de la Ley 387 de 1997:</p> <p>Cuando el desplazamiento afecta a poseedores, estos podrán informar el hecho, de manera individual, ante las Personerías Municipales, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, para que adelanten las acciones judiciales y administrativas a que haya lugar, y no se interrumpa el término de prescripción a su favor. Es decir, que se congele el tiempo de permanencia en el predio y quede constancia de que fue abandonado debido a la violencia.</p> <p>b. Acciones en el marco del Decreto 2007 de 2001:</p> <p>Cuando una comunidad rural es afectada por el inminente riesgo o la ocurrencia del desplazamiento, los poseedores allí ubicados pueden acudir ante el Comité de Atención Integral a la Población Desplazada para que la zona sea declarada como tal y se pongan en marcha las medidas de protección.</p>

	consecuencia los actos que impliquen la llamada falsa tradición solo se pueden inscribir cuando el predio ya cuente con su folio de matrícula inmobiliaria.		
Ocupante.	Es la persona que realiza directamente actividades de explotación en terrenos baldíos, es decir, aquellos terrenos que pertenecen a la Nación y que pueden destinarse a adjudicación.	Se puede demostrar a través de documentos, testimonios, inspección ocular o cualquier otro medio legal de prueba. Entre los documentos que pueden servir, se cuentan recibos de pago de servicios públicos, facturas de compra de insumos y, en general, otros documentos con los que se pueda probar la explotación del terreno.	<p>¿Cómo puede un ocupante pasar a ser el propietario?</p> <p>Solicitándole la titulación del predio al Incoder para que verifique el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 160 de 1994. Luego de esto, dicha entidad le entrega una resolución al solicitante, adjudicándole el predio baldío. Finalmente, para adquirir la calidad de propietario, el adjudicatario deberá inscribir dicha resolución en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.</p>
			<p>Acciones en el marco del Decreto 2007 de 2001:</p> <p>Cuando una comunidad rural es afectada por el inminente riesgo o la ocurrencia del desplazamiento, los ocupantes allí localizados pueden acudir ante el Comité de Atención Integral a la Población Desplazada, para que la zona sea declarada como tal y se pongan en marcha las medidas de protección.</p> <p>b. Cuando el ocupante de un predio es desplazado por la violencia, puede informar de éste hecho a las Personerías Municipales, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría o al Incoder (antes Incora) y solicitar que sea incluido en el Registro Único de Predios Rurales Abandonados por la Violencia (RUP) llevado por ésta última entidad. El ingreso al RUP se convierte en una prueba de la ocupación para el solicitante</p>

Tenedor.	<p>Es aquella persona que realiza actividades sobre un predio por sí misma o través de otra, reconociendo que existe un tercero con mejor derecho sobre el bien. Ejemplos: aparceros, cosecheros, arrendatarios, comodatarios.</p>	<p>Se demuestra a través de documentos, testimonios, inspección ocular o cualquier otro medio legal de prueba que evidencie los actos que justifiquen la tenencia del predio, tales como contratos de arrendamiento o recibos de pago de cánones.</p> <p>Los derechos reales, como el usufructo, el uso y la habitación, sólo se pueden probar con el Certificado de Tradición y Libertad donde aparezca la correspondiente inscripción.</p>	<p>Artículo 984 del Código Civil: reconoce a toda persona que ha sido despojada violentamente de la tenencia de un bien, el derecho a solicitar el restablecimiento de las cosas dentro de los seis meses siguientes a que ocurriera el hecho, sin que para ello necesite probar algo diferente al robo o despojo del predio.</p>
			<p>El Código de Procedimiento Civil en su artículo 408, establece que los asuntos de restitución de tenencia de cualquier predio y el reconocimiento de las indemnizaciones correspondientes se deciden únicamente en un proceso judicial.</p>
			<p>Acciones en el Derecho Agrario: El artículo 98 y los siguientes del Decreto 2303 de 1989, organizan y crean la jurisdicción agraria y determinan que quien explota económicamente un predio agrario en los términos del artículo 21 de la Ley 4ª de 1973 y es privado total o parcialmente de su tenencia material contra su voluntad, sin una orden de autoridad competente o sin causa que lo justifique, puede pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante, exigiéndole previamente el pago del valor de las mejoras que éste último haya podido realizar en la finca. Esta solicitud debe interponerse dentro de los 120 días siguientes al acto de ocupación o al momento en que se entere que esto ocurrió.</p> <p>Acciones en el Derecho Policivo: Con los procesos de amparo contra la perturbación de la posesión contemplados en los artículos 12, 125 y 131 del Código Nacional de Policía y de lanzamiento por ocupación de hecho, previsto en la Ley 57 de 1905 y el Decreto 922 de 1930, o en las dispuestas de manera específica en los Códigos de Policía Departamentales, se pone fin a la ocupación arbitraria de un predio y se le restituye al tenedor legítimo.</p>

Fuente: Cuadro elaborado por el autor del presente trabajo de grado con base a información brindada por el (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).

Anexo 2. Cuadros de Análisis de Condición de víctimas y sus predios.

Cod.	Solicitante	ubicación	Grupo Armado	Tipo de violencia.	Adquisición Original del Bien.	fragmentación	Vínculo con predio.	Actividad económica al momento del abandono.	Condición actual del bien	Condición actual de víctimas.	Observaciones	Hectáreas
76111-31-21-001-2013-00029-01	CLARA GLADYS CARRILLO	Predio "La Rosa", Ubicado en el Corregimiento Venecia, Municipio de Trujillo.	ELN Y RASTROJOS,	Asesinato de hijo del propietario y amenazas. Se da abandono en 2005.	En realidad el bien que pretende la víctima, lo permutó antes de los actos de violencia.	No Registra.	Construcción de casa.	Cultivos de Café, plátano, frijol y yuca.	Condiciones irregulares.	Víctima continúa con actos de señorío sobre el predio: visitas esporádicas.	No hay relación jurídica con el bien.	NO HAY.
<u>76111-31-21-003-2013-00006-00</u>	Rafael Bermudez Mesa.	Predio "Los Alpes", Ubicado en la Vereda La Italia, Corregimiento Puente Blanco.	Delincuencia.	Juez determina que no hay condición de víctima, pues el demandante alega sus dificultades económicas. Expuso asesinato de vecinos. Se genera Abandono.	Predio fue adquirido en 1980 junto a su hermano y dividido. En 1992 INCODER reconoce la explotación del predio.	División con hermano.	Casa.	Cultivos de lulo y tomate de árbol.	Condiciones regulares	Crisis económica.	Se habla de corregimiento Puente Blanco, cuando en realidad no existe ni está registrado. No existe vereda Italia.	NO HAY.
<u>76 111 31 21 002 2013 00029 00</u>	PAULA ANDREA PULIDO GRANADA	Predio "El Jazmín", Ubicado en el Corregimiento La Sonora,.	Rastrojos.	Asesinato de hermano. Se genera Abandono en 2007.	La señora PAULA ANDREA PULIDO GRANADA, fue poseedora del predio "EL JAZMÍN" desde el año de 1999, época en la que realizó convenio de compraventa con el señor Jaime Ortega Blandón -hermano de su esposo-; que posteriormente en el año 2009 adquirió la propiedad de dicho inmueble, y que en virtud de ello explotó económicamente.	No se registra.	Construcción de casa.	Cultivos de mora., café, frijol, tomate de árbol.	Condiciones irregulares.	El Bien se registro mientras víctima se encontraba en condición de amparo en Agosto de 2011.	HIPOTECA no ha sido cancelada. Víctimas aseguran que no quieren retornar al predio.	2 ha. 3.210 m2.

<p><u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>003 2013</u> <u>00028 00</u></p>	<p>LIZETH ALEJANDRA GOMEZ HOYOS</p>	<p>Predio Ubicado en Zona urbana "CARRERA A 2 N° 4-22", en el Corregimiento Venecia</p>	<p>Paramilitar es Y FARC.</p>	<p>30 de Abril de 2005: secuestraron y posteriormente asesinaron al señor Alonso Gómez Restrepo, padre de la solicitante, FARC. Tiempo después víctima recibe amenazas telefónicas de alas Marlon, AUC. Presidente de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.</p>	<p>Adquirido en común y proindiviso mediante escritura pública número 206 de fecha 19 de septiembre de 2006 de la Notaria Única de Trujillo Valle S.A., por la señora Lizeth Alejandra Gómez Hoyos y su hermano Alonso Gómez Hoyos, la nuda propiedad del bien inmueble ubicado en la carrera 2 Nro. 4 – 22. Casa de dos plantas.</p>	<p>El usufructo sobre el bien inmueble, lo tiene los señores José Líder Restrepo y Alberto Gómez López; la señora Lizeth Alejandra Gómez Hoyos, está vinculada al predio objeto de restitución, hace aproximadamente 22 años, este predio estaba a nombre del señor José Líder Restrepo, cuñado del padre de la solicitante. Pero la posesión del predio siempre estuvo en cabeza de Lizeth Gomez de manera pública como poseedores del bien.</p>	<p>Al momento de la compra hay una casa construida. Se genera un problema respecto a la titulación del usufructo.</p>	<p>Cultivos.</p>	<p>Buenas condiciones</p>	<p>Al momento del desplazamiento o deciden acudir a la ciudad de Bogotá.</p>	<p>Falta de claridad de la Escritura Pública mediante la cual Restrepo Zuluaga vende la nuda propiedad a los nietos del señor Gómez López y a su vez este último se reserva el usufructo del bien; si se vislumbra detenidamente en la escritura se distingue que hay dos usufructos sucesivos lo cual está prohibido por la Ley Art. 828 del Código Civil Colombiano.</p>	<p>212 m2</p>
<p><u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>003 2013</u> <u>00020 00</u></p>	<p>BLANCA DIDIA SANTA ACOSTA</p>	<p>Predio "LA PLAYA", Ubicado en el Corregimiento El Tabor,</p>	<p>PARAMILITARES.</p>	<p>La víctima era operaria de TELECOM, razón por la cual los grupos alzados en armas la hostigaron en diferentes ocasiones.</p>	<p>Bienes adquiridos por cabeza de familia, víctima actúa en representación de familia.</p>	<p>No registra.</p>	<p>La titularidad del bien o sea el derecho real de dominio se encontraba en cabeza del señor SILVIO DE JESÚS SANTA SANTA (q.e.p.d.), sobre la totalidad del inmueble. Padre de la víctima.</p>	<p>Operaria de TELECOM.</p>	<p>HIPOTECA ABIERTA, ANTE EL BANCO AGRARIO.</p>	<p>Grave situación económica</p>	<p></p>	<p>3 Hectáreas</p>

<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>003 2013</u> <u>00017 00</u>	MIRIAM ARIAS	Predio "LA SECRET A", Ubica do en el Corregimi ento El Tabor,	Paramilitar es.	Se acusa al hijo de la víctima de delatar un laboratorio de drogas.	Antonio José Toro Orrego, esposo de la solicitante adquirió el predio "La Secreta", mediante escritura pública Nro. 228 del 02 de Octubre de 1979 otorgada en la Notaría Única de Riofrio, por compraventa que le hiciera al señor Octavio de Jesús Valencia Montoya.	No registra.	Construcción de casa.	No registra.	HIPOTECA ABIERTA. "La Secreta" "hace parte de la zona amortiguadora del Ecosistema Estratégico Parque Natural Regional Páramo del Duende"	Víctimas deciden acudir a la ciudad de Cli, donde regresan a sus predios a los 6 meses. Hijo de víctima vive actualmente en Brasil después de ser amenazado.	Desplazamiento continuo: primero 1990 en predio: LASECRETA. Segundo 2002.	15 Hectáreas
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>002 2013</u> <u>00028 00</u>	ORLANDO ALARCÓN CASTILLO	Predio "EL TRONCAL", Ubica do en la Vereda Playa Alta, del Corregimi ento La Sonora	BACRIM. RASTROJOS.	Titular del bien amenazado por ser presidente de Junta de Acción Comunal.	Compraventa.	No registra.	No registra.	Cultivos.	El predio solicitado en restitución lo trabaja el señor Arcadio Londoño, vecino suyo quien se encarga de cuidar el predio con el consentimiento expreso del propietario, utilizándolo para pastoreo de ganado.	Residen en Buga, sin trabajo y realizan labores de albañil.	Desplazamiento continuo: primero 1990. Segundo 2011. CREDITO CON BANCO AGRARIO.	8 hectáreas
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>002 2013</u> <u>00022 00</u>	CARMEN EMILIA OROZCO DE HURTADO	Predio "ALASKA 2", Ubica do en el Corregimi ento ELTABOR	Paramilitar es.	Familia es agredida físicamente, hay intento de violación sobre hija del propietario y extorsión por más de 20 millones de pesos. Abandono.	Adquirió el predio "Alaska 2" por herencia que recibió del hermano CESAR TULLIO OROZCO en el año de 1989.	No registra.	Construcción de 4 casas	Cultivaban en el predio maíz, frijol, yuca, arracacha, pasto, café, plátano y tenían ganado	Buenas condiciones, hijo de víctima vive en el predio, hace más de un año.	Desde el momento del abandono, acudieron a la ciudad de Bogotá donde vivieron en un lugar para desplazados. No recibieron ayuda alguna del estado.	RETORNO, AÑO 2011.	21 ha.
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>002 2013</u> <u>00015 00</u>	BERTA CECILIA ORTIZ RAMÍREZ	Predio "EL BRILLANTE", Ubica do en la Vereda Cáceres, del Corregimi ento La Sonora	Rastrojos.	Desaparecimiento y muerte de su hijo Adán Cuellar Ortiz. Abandono.	Por escritura pública No. 170 del 5 de agosto de 2006 extendida en la Notaría Única de Trujillo Valle por compraventa que celebrará con su ex- consorte.	Propiedad que a su vez tiene origen en la división material del predio denominado "La Bananera" de mayor extensión e identificado con matrícula inmobiliaria No 384-90460,	Construcción de casa.	Cultivos.	No hay deterioro en superficie.	Acudir al municipio de Bugalagrande. PRÉSTAMO: ante el Comité de Cafeteros por valor de \$2.700.000 para sembrar y que en noviembre de 2013 debe	RETORNO: al predio luego de confrontar al grupo armado por intermedio de uno de sus integrantes al que se refirió como "campanero", les solicitó que le permitieran regresar a la finca y mediante comunicación	3 HECTAR EAS.

						según se desprende de la escritura pública No. 29 del 13 de febrero de 2001.				iniciar el pago de \$400.000 mensuales de un total de \$1.600.000.	telefónica le manifestaron que podía regresar.	
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>002 2013</u> <u>0013 00</u>	ORLANDO ALARCÓN CASTILLO, JULIO CESAR ALARCÓN CASTILLO	Predio "LAS PALOMAS", Ubicado en la Vereda Playa Alta, del Corregimiento la Sonora	Rastrojos.	Amenazas por favores políticos. Abandono.	Los solicitantes ORLANDO ALARCÓN y JULIO CESAR ALARCÓN ostentan la calidad de propietarios del predio "LAS PALOMAS", cuyo folio de matrícula inmobiliaria da cuenta que ciertamente son titulares del derecho real de dominio, pero reconocen la posesión y el derecho que les asiste a sus sobrinos EDWIN MAURICIO y YEIMY CRISTINA, quienes detentan calidad de poseedores de una parte del mismo predio.	Fragmentación en explotación y en posesión del bien. para el año 1988 le vendió por carta venta al señor José Miguel Serna una parte del terreno y que cuando éste murió su heredera le vendió a Berenice Arboleda hermana de su esposa.	La mayor extensión del predio hace parte de la Reserva Natural Municipal de Trujillo , declarada mediante Acuerdo No. 7 del 05 de septiembre de 1996.	Ganado. En 15 hectáreas con pasto kikuyo.	Rastrojo y pérdida de actividades.	Sin trabajo ni ingresos fijos	El Banco Agrario de Colombia – Oficina Trujillo Valle, informo sobre la vinculación del señor JULIO CESAR ALARCÓN CASTILLO con tres créditos, así:	6 ha
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>001 2013</u> <u>0034 00</u>	Jorge Eduardo Rojas Lara	Predio "EL BRASIL", Ubicado en el Corregimiento la Sonora	Paramilitares Bloque Calima.	En septiembre de 2001 debido al accionar del bloque Calima de la AUC el hijo del solicitante, en esa época concejal, empezó a ser objeto de amenazas y extorsiones, de manera verbal, así, un día el comandante de las AUC alias "Roger" o "El Político" le exigió pagar en ocho días la suma de diez millones de pesos para "respetarle" la vida.	El predio "EL BRASIL" fue adquirido por el señor Jorge Rojas mediante compraventa elevada a escritura pública N° 47 el 2 de febrero del año 1971 en la Notaría Segunda de Tuluá, mediante la que adquirió la totalidad de derechos sobre el referido bien al señor Carlos Arturo Palacios Cadavid35. Hay Problema con linderos que no coinciden. Diferencia de 9 hectáreas.	No registra.	Construcción de casa.	El solicitante vivía con sus tres hijos y su esposa en el predio, que el mismo se encontraba cultivado en pasto, lulo y tomate de árbol,	Ante el comprobado estado de abandono del inmueble por cerca de doce años, pues al mismo solamente un amigo del solicitante o su hijo de vez en cuando lo visitan para "darle vuelta."	Sin trabajo.	Desplazamiento Continuo: El primero de ellos en el año de 1990 como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco de la conocida "masacre de Trujillo"; el segundo en el año 2001, cuando en el corregimiento de La Sonora como se reportaba una fuerte influencia del paramilitarismo su hijo fue víctima de extorsiones y amenazas	

<p><u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>001 2012</u> <u>0020 00</u></p>	<p>Rosa Emilia Gutiérrez y 3 más.</p>	<p>Predio "EL PORVENIR", Ubicado en el Corregimiento la Sonora</p>	<p>AbANDONO.1991</p>	<p>Amenazas directas contra el propietario del bien, acusado de ser colaborador de la guerrilla.</p>	<p>Compraventa.</p>	<p>No Registra.</p>	<p>En el fundo tenían una casa de habitación construida en bahareque y techo de zinc</p>	<p>Realización de actividades agrícolas como el cultivo de café, maíz y frijol, y la crianza de gallinas para el consumo humano</p>	<p>Pese a que encontraron el predio en muy malas condiciones y han tratado de adecuarlo como estaba antes del desplazamiento, a la sazón, realizando un préstamo con el Comité de Cafeteros, ello no se ha logrado plenamente, pues partes del inmueble aún están en rastrojo.</p>	<p>Retorno un año después, situación económica difícil.</p>	<p>Falta de claridad de la Escritura Pública mediante la cual Restrepo Zuluaga vende la nuda propiedad a los nietos del señor Gómez López y a su vez este último se reserva el usufructo del bien; si se vislumbra detenidamente en la escritura se distingue que hay dos usufructos sucesivos lo cual está prohibido por la Ley Art. 828 del Código Civil Colombiano, para ser más exacto se cita textualmente las líneas de la escritura así: "El señor Alberto Gómez López, manifiesta: Que acepta la presente escritura de venta de nuda propiedad para sus nietos y a la vez constituye usufructo a su favor hasta el día de su fallecimiento"</p>
<p><u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>001 2012</u> <u>0026 00</u></p>	<p>Estela Hernández Ducuara</p>	<p>Predio "LA GRANJITA A", Ubicado en la Vereda Río Chiquito, Corregimiento la Sonora</p>	<p>Paramilitares.</p>	<p>Asesinato de compañero permanente.</p>	<p>El predio "LA CARMELITA" (El de mayor extensión), fue adquirido por el abuelo de la señora Estela Hernández Ducuara, señor Jesús Ducuara Bocanegra, por compra que le hizo al señor Julio Cesar Ángel Foronda, a través de la escritura pública N° 132 del 01 de junio de 1973.</p>	<p>Predio "LA GRANJITA" feudo de menor extensión que hace parte del predio "LA CARMELITA", La solicitante está vinculada con el predio por 10 años aproximadamente, después de que su tía le cedió una parte del predio "LA CARMELITA", al cual denominó "LA GRANJITA".</p>	<p>Tras el fallecimiento del señor Ducuara Bocanegra, sus hijos iniciaron el respectivo proceso de sucesión, en el que le fue adjudicado el referido predio a la señora ESTANISLADA DUCUARA DE MONTIEL, mediante la</p>	<p>cultivó a su vez café, plátano y yuca, d</p>	<p>22 de Julio de 2002, realizó una venta una parte de 2 hectáreas a los señores Martha Isabel Hernández Ducuara y Albeiro Duque, mediante la escritura pública N° 299 de la Notaría Única de Riofrio.</p>		

							escritura pública N° 239 del 19 de junio de 2002. construyó una casa de bareque, madera y zinc,					
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>002 2013</u> <u>00016 00</u>	JUAN ALBEIRO PUERTAS ROJAS	Predio "EL BOSQUE", Ubicado en la Vereda La Libertad, Corregimiento la Sonora	Paramilitares.	2004 por la aparición de grupos al margen de la ley, específicamente las "AUC", que se llevaron a los señores RUBIAN y MAURICIO GALLEGO, hermanos de su cuñada MARÍA LILIANA y que vivían temporalmente con ellos, de quienes hasta hoy no se tiene conocimiento de su paradero	Proceso de sucesión.	No registra		Cultivos de tomate de árbol, lulo y mora y un proyecto extenso de ganadería, vacas lecheras, ganado de cebo, terneros, caballos,	el fundo ahora está sólo y está siendo cuidado por el señor JOSÉ MUÑOZ, encargado de cuidar la casa, los cercos, el potrero.	Trasladándose al municipio de Trujillo V., donde vive actualmente con su mamá y hermanos en una casa arrendada que entre todos sostienen, dedicándose él a la vaquería.	Se acogieron al programa PRAN para pagar la deuda que tenían con el Banco Agrario y poder librar la finca con la expectativa de recuperarla, porque ahora si hay condiciones para regresar, pero todo depende de la fuerza pública y de la presencia del Estado, no han recibido indemnización y tampoco ha vuelto a recibir las ayudas humanitarias.	8 hectareas
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>003 2013</u> <u>00016 00</u>	JOSE DE JESUS BUITRON SANCHEZ	Predio "LA PALMERA", Ubicado en la Vereda Monteloro, Corregimiento la Sonora	Rastrojos.	Asesinato de vecinos y uso de propiedad para campamento. Amenazas directas.	El Señor José de Jesús Buitrón solicitante en la presente acción, tiene vinculación con el predio denominado La Palmera identificado con la matrícula inmobiliaria Nro. 384-78835, desde hace 16 años, por compraventa que le hiciera al señor José Alexander Mejía Suarez y a la señora Rubiela Mejía Suarez mediante Escritura Publica Nro. 220 del 29 de junio del año de 1996	No registra.	El predio lo utilizaba el señor Buitrón para vivienda y para actividades agrícolas.	Cultivos de Uchuva, pastos y curaba.	Condición regularr.	A pesar de las amenazas y hechos de violencia vividos en la región el señor Buitrón realiza la labor de pequeña agricultura sembrando mora, pasto, curuba, uchuva y huerta casera.	Que desde que regresó al predio ha visto permanentemente en la zona la presencia de los "rastros" quienes se encuentran haciendo las mismas actividades de saqueo, indicando en su declaración que "cuando sale de la casa a hacer mercado, ellos entran de manera forzosa a la casa, se roban la remesa, las ollas, las gallinas, los huevos, dañan las puertas..."	9 hectareas
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>001 2013</u> <u>00030 00</u>	José Octavio León Aguirre	Predio Rural denominado "La Esmeralda	Rastrojos.	En el 2005 compró un ganado sin tener conocimiento que presuntamente había sido hurtado	El señor José Octavio León Aguirre se vinculó jurídicamente al predio "LA ESMERALDA" en el	No registra		actividades ganaderas tales como abastecimiento de pastos		Reside actualmente en Cali., junto a familiares.	DESPLAZAMIENTO CONTINUO: en 2005 y 2012, gracias a poderío de rastrojos.	

		", corregimiento la Sonora.		por la organización criminal " LosRastrojos". Cuando se dio cuenta de tal procedencia, manifestó su disgusto al vendedor, motivo por el cual fue amenazado de muerte por hombres pertenecientes a la mentada banda criminal	año 2003 mediante compraventa elevada a escritura pública número 379 del 2 de septiembre, otorgada en la Notaría Unica del Círculo de Riofrío.			y compra y venta de ganado				
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>001 2012</u> <u>0007 00</u>	Ferney Santa Santa	Predios "LA BORBON ERA" y "LA CATURR ERA" Ubicados en el Corregimiento de La Sonora	Rastrojos.	Asesinato de vecinos y amenaza directa.	Respecto de "LA CATURRERA", hace 23 años por adjudicación que en común y proindiviso se le hizo en la sucesión de sus padres, mediante la sentencia 151 del 14 de diciembre de 1988. a "LA BORBONERA", desde hace 11 años, mediante compraventa elevada a escritura pública N° 294 el 7 de diciembre de 2001.	Primer predio, fruto de sucesión.	El predio "LA CATURR ERA" lo tenía destinado para su vivienda y a de su familia, mientras que "LA BORBON ERA" era empleado en actividades agrícolas relacionadas con el cultivo de café y plátano.	cultivos café y plátano.	Como consecuencia del mal estado en que encontró los predios tras su retorno, se vio forzado a realizar un PRÉSTAMO con el BancoAgraio para construir una casa en mateial y techo de zinc en "LACATURR ERA", y para cultivar en "LA BORBONERA ".	Subsisten de cultivos menores.	1 HECTAR EA+ 1 HECTAR EA.	
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>003 2013</u> <u>00005</u> <u>00</u>	MAURICIO HERNAN CORREA ACOSTA	Predio "Villa Cenelia" Ubicado en el corregimiento EL TABOR	Paramilitares.0	A finales del año de 1993, en una oportunidad, grupos armados ilegales, perpetraron en el predio rural, más concretamente en su casa, con la finalidad de llevarse la remesa que tenían, allí durmieron y se escondieron esa noche.	Adquirido por el señor Mauricio Hernán Correa Acosta y sus 6 hermanos, mediante sentencia de adjudicación en sucesión calendada 23 de febrero de 1970, proveniente del Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, figurando como causante su señor padre JOSE GUILLERMO CORREA	Mediante escritura pública Nro. 295 del 15 de septiembre de 1989, se efectuó la partición material del 50% del predio de mayor extensión, correspondiéndole al señor Mauricio Hernán Correa Acosta, una séptima parte del nuevo predio, adquiriendo así la propiedad en	El inmueble objeto de esta solicitud tenía construido dos casas, una con paredes de bahareque y pisos en madera con techo de zinc compuesta por 3 habitaciones; la otra casa tenía techo	Cultivo de café, plátano y ganadería.	Cundo el solicitante retornó al predio, encontró que los cimientos de la casa habían cedido en su totalidad, el piso y el cielo raso estaban destruidos; los cultivos se habían acabado, el predio estaba	Sin trabajo. Grave situación economica que le obliga a volver.	CRÉDITO: Banco de Bogotá, con la finalidad y destino de la renovación por siembra de 5.000 árboles de café, crédito tramitado por intermedio del Comité de Cafeteros del Valle del Cauca. Dadas las adversidades padecidas en la ciudad de Cali, en el año 2010 el solicitante decide regresar al predio, por	11 HECTAR EAS.

					VASQUEZ	común y proindiviso con sus 6 hermanos.	de zinc, paredes de bahareque cocina y 5 habitaciones.		llo de maleza, le habían hurtado las cuerdas, que llevaba la energía a la casa.		cuanto el Comité de Cafeteros Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca, estaba liderando proyecto de siembra de café, ante lo cual el señor Mauricio Hernán Correa Acosta, vio la oportunidad para retornar a la vida del campo, por consiguiente a su finca.	
<u>7611131</u> <u>21001-</u> <u>2012-</u> <u>00027B-</u> <u>00-</u> <u>Trujillo-</u> <u>28-de-</u> <u>junio</u>	Ualdina Blandón de Ortega	Predio "La Culebra" - Corregimiento La Sonora	Paramilitares.	Amenazas, dadas por grupos con lista en mano, después de ser acusados de colaborar con la guerrilla. ELN había ocupado forzosamente el terreno para acampar en el predio.	El cónyuge de la solicitante, señor JOSÉ MARÍA ORTEGA QUINTERO, se vinculó al predio "LA CULEBRA1" en el año 1977 mediante compraventa elevada a escritura pública número 308 del 9 de marzo, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Trujillo.	No registra.	El inmueble objeto de esta solicitud tenía construido dos casas, una con paredes de bahareque y pisos en madera con techo de zinc compuesta por 3 habitaciones; la otra casa tenía techo de zinc, paredes de bahareque cocina y 5 habitaciones.	cultivos de café, plátano y pasto, siendo estos cultivos una forma de adquirir su sustento diario.	al momento de presentación de la acción se dijo que el área era de 17 hectáreas con 1875 m2 según información de catastro y, 12 hectáreas con 8000 m2 según la Oficina de egistro de II.PP. de Trujillo, luego del levantamiento topográfico al terreno se comprobó que era efectivamente de 13 hectáreas con 4677 m2		13 hectáreas con 4677 metros cuadrados	
<u>7611131</u> <u>21001-</u> <u>2012-</u> <u>0006-00-</u> <u>Trujillo-</u> <u>23-de-</u> <u>julio</u>	ALBA LUCIA SANTA DE SANTA	Predio "La Bananera" , corregimiento La Sonora.	Paramilitares.	Amenazas directas contra el propietario del bien, acusado de ser colaborador de la guerrilla .	El señor GUILLERMO DE JESÚS SANTA SANTA, cónyuge de la solicitante, adquirió el predio en común y proindiviso en la sucesión de sus padres : sentencia 151 del 14 de diciembre de 1988 , proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tuluá.	Predio hizo parte de proceso de sucesión, se vendió más no se registró una parte del mismo.	Se construyó una casa de pisos de madera y techos de barro, en la cual vivían 5 miembros de la familia. Hay legitimidad jurídica en la medida que la solicitante es conyugue del	Cultivo de café, plátano, frijol y banano.	No hay deterioro en superficie.	No hay información.	ALBA LUCIA, reconoció que le vendió al señor DIEGO FERNANDO CARDONA, cónyuge de su hija FLOR ALBA SANTA, dos años atrás, "1 hectárea, 1 plácito o plácito y media" del predio "LA BANANERA", por valor de \$8.000.000 o \$9.000.000 millones de pesos aproximadamente,	1 hectárea 8286 m2

							propietario.				pero que no han hecho las escrituras porque no tienen dinero. Así las cosas, al no tener el señor DIEGO FERNANDO CARDONA la calidad de parte, tercero u opositor en el proceso, y al no haberse formulado una pretensión, excepción u oposición en su favor, no es posible emitir pronunciamiento en esta sentencia
<u>76 111</u> <u>31 21</u> <u>001 2012</u> <u>0029 00</u>	María Olivia Muñoz Ladino	Los predios "LA ROSA" y "ALTOMIRA", corregimiento La Marina.	PARAMILITARES	El día del padre del año 2003, más o menos, el cónyuge de la solicitante, señor JOSE ADAN RUIZ GOMEZ, desapareció. Días después de la desaparición de su compañero, cuando la señora MARIA OLIVA MUÑOZ LADINO se dirigía a Naranjal fue retenida por los captores de su consorte, quienes la llevaron hasta el lugar donde se encontraba cautivo y desde esa fecha no volvió a saber nada de éste.	En el año 2003, la señora MARIA OLIVA MUÑOZ LADINO, compró a la Junta Cívica Provivienda Comunitaria de Tulia el predio objeto del proceso, acto jurídico protocolizado mediante la Escritura Pública 785 del 21 de mayo de 2003, de la Notaría Única de Roldanillo.	No registra			Las amenazas son constantes para el no retorno.	La víctima dice vivir desde el año 2008 en el municipio de Bolívar. Los recursos económicos de la señora MARIA OLIVA MUÑOZ LADINO son escasos.	

<p>76 111 31 21 003 2013 00026 00</p>	<p>MARIA LEONIL A CARDONA DE CARDONA NA ALBA LUCIA SANTA DE SANTA</p>	<p>Predio "La Esperanza ", Ubicado en el Corregimien- to La Sonora</p>	<p>Rastrojos. PARAMI LITARES</p>	<p>En el año 1990 miembros de grupos armados ilegales, presuntamente paramilitares, secuestraron al esposo de la solicitante, el señor Arnoldo de Jesús Cardona Moreno, por tener supuestos nexos con grupos armados. Algunos vecinos de la zona le han manifestado a la señora María Leonila Cardona de Cardona, que su cónyuge fue asesinado y tirado sus restos al río Cauca.</p>	<p>El predio fue adquirido por compraventa que le hiciera al señor Jairo Gómez en el año 1983, documento que en el momento de su desplazamiento se extravió, según lo informó a la (U.R.T).</p>	<p>El predio reclamado hace parte de uno mayor extensión identificado con la matrícula inmobiliaria Nro. 384-40409 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, en el cual figura como propietario actual el señor Roque Israel García Cardona.</p>	<p>Construcción de casa.</p>		<p>En 1998 la señora María Leonila Cardona de Cardona retornó al predio objeto de restitución con tres (3) de sus hijos, vivió allí tratando de levantar la tienda hasta el año 2000, cuando miembros de grupos armados ilegales llegaron a la Sonora.</p>	<p>La señora Alba Lucia Santa de Santa al retornar al predio, pero señala que los atropellos siguieron por parte del grupo paramilitar, que era conocido en la región por sus antecedentes sanguinarios y continuas violaciones a los derechos humanos.</p>	
---	---	--	--	--	---	---	------------------------------	--	--	---	--

Cod.	solicitante	Ubicación	Grupo que ocasionó el despojo	Tipo de violencia. Razón de abandono o despojo.	Adquisición Original del Bien.	Fragmentación.	Vínculo con predio. Físico y Jurídico.	Actividad económica al momento del abandono.	Condición actual del bien	Condición actual de víctimas.	Observaciones Adicionales	Hectáreas
76111-31-21-002-2013-00011-00	YAMILE TH FAR.	Vereda la Vigorosa. Corregimiento La Fenicia.	Paramilitares.	Asesinato de tíos y tías a comienzos de los 90s. Tildados de ser guerrilleros. Amenazas constantes. Se genera Abandono.	Compraventa realizada en el año de 1994 al señor Leonel Pérez Muñoz.	No Registra.	Una casa de bareque con una sola habitación, abandonada.	Cultivos de Café.	Recae un embargo. El predio se encuentra actualmente explotado por Luis Emilio, en calidad de colindante, bajo encargo del "comprador" en transacción anterior, mas reconoce mejor derecho a la madre de la víctima.	Después de desplazamiento o víctimas se sitúan en cabecera rural de Riofrio, para luego migrar a España. Donde madre de solicitante y titular del derecho, desaparece bajo confusos echos.	No se considera pretensiones de opositor, pues se aprovechó de situación: de fallecimiento de quien le encargo el predio. Luis Emilio Sánchez, uno de los solicitantes, permaneció durante más de 10 años en el predio, por mandato de comprador en año 1995. Luis dice que no hubo violencia sobre víctima. Juez considera que no hay buena fé pues las condiciones de conflicto y de las víctimas eran conocidas	3 Hectáreas 2612 mts .

76 111 31 21 002 2013 00010 00	JAVIER DE JESÚS LADINO RAMÍRE Z	Vereda el Bosque, Corregimie nto de Portugal de Piedras.	ELN. Paramili tares. Ejercito.	Primero, asesinato de padre e hijos. Segundo, Se relata que se generaron FALSOS POSITIVOS: las unidades militares simularon un enfrentamiento con las víctimas a quienes mostraron como personas muertas en combate, efectuaron una serie de disparos hacia la vivienda del señor LADINO; pretendieron, con el cambio de la escena del crimen, justificar el cruento sacrificio de la población civil haciendo pasar a las víctimas como miembros del ELN y divulgar esa apariencia que reforzaron vistiendo a los inmolados con prendas militares. Pero sin percatarse que las balas atravesaban la piel y no los uniformes de los supuestos guerrilleros (Informe de la Comisión No Gubernamental de Esclarecimiento de Hechos de Violencia – Masacre de Riofrío – octubre 5 – 1993, blog “La masacre de Riofrío, volver a los rostros del olvido, noticia del diario El País del 11 de marzo de 2003”).	Solicitante alega la posesión sobre el 50% del predio “LAS MIRLAS”, de acuerdo con las evidencias, se logró establecer la veracidad de su afirmación, al haberla adquirido mediante negociación verbal con su fallecido padre.	Se aclaró que la gran finca estaba dividida en “Las Mirlas” – abajo– y “El Mirador”. División de finca se da con el fin de cancelar deudas.	Generación de amplias deudas.	Ganadería, agricultura, avicultura, caficultura y siembra de caña, lograron montar una tienda y comprar un campero con unos vecinos con el que trabajaba la ruta hacía la vereda.	Actualmente el predio solicitado en restitución se encuentra habitado por dos familias en cabeza de los señores ANTONIO JOSE GARCIA, .Dueño reconoce que hay ocupación sobre el predio, mas le da pesar con las nuevas casas y sus dueños.	Vive actualmente con lo que el gobierno le da, porque ellos no quieren volver, debido a que, según captó, la situación de orden público es delicada por presencia al parecer de Los Rastrojos, que cuando fueron con la Unidad a tomar las medidas, una hora después de haber llegado, apareció una camioneta de los "Rastrojos". Sus hijos quieren terminar la Universidad.	Reclamante se destacó como un líder campesino al ser presidente de la Junta Administradora Local. Añadió, que un señor apodado “Bananas” que tenía tierras en Fenicia y adquiriría tierras, le propuso compra por la finca, en el sector unos aceptaban y otros no, y la guerrilla también instigaba, pero eso eran problemas entre la guerrilla y los narcotraficantes, y un día este señor dijo que, masacrando a dos o tres familias ahí si tenían que vender las tierras; esa noticia llegó pero nunca creyeron que esto fuera a suceder, pues por su trabajo social se movía a todas partes con tranquilidad	6 Hectreas.
76 111 31 21 002 2013 00021 00	LUZ MERY SÁNCHE Z LÓPEZ	corregimie nto de Salónica,	paramili tares	Exotsión. Pensión de 500 mil a grupos ilegales, al no poder cumplir se dieron las amenazas. Hechos son desmentidos por vencia y actual arrendataria, quien dice que se desplazaron por quiebra de tienda.	Que en esa casa vivió con sus padres desde el mes de marzo de 2006, residencia a la que llegaron, por cierto y según la demanda, desplazados de la vereda Portobelo	NO REGISTRA.	Que para pagar ese precio la solicitante obtuvo un crédito hipotecario con el entonces GRANBAN	Instalación de Tienda	Arrendado.	Habitan en la ciudad de Bogotá.	También dice que el contrato de arrendamiento se celebró telefónicamente y algunos recibos se encuentran girados a	0.0294 ha. y área georrefere nciada de 254 m2.

					porque allá habían retenido y casi asesinan a su hermano. Se instalaron en calidad de arrendatarios en una casa de habitación		CO S.A. BANCAFE hoy BANCO DAVIVIENDA, por valor de \$24.500.000; posteriormente, para el mes de diciembre de 2007, realizó otro préstamo al BANCO DAVIVIENDA por valor de \$10.000.000,				nombre del señor LUIS AURELIO ROJAS esposo de LUZ MERY; itera que esta dama y su padre, quien era tapersona que administraba la tienda, quebraron porque vio el negocio cuando iba para atrás y comenzaron a conseguir platas prestadas, marchándose sin pagarlas y aún los acreedores le preguntan sobre el paradero de ellos, para irles a cobrar.	
76-111-31-21-003-2013-00025-00	ANA CRISTINA MORENO LLANOS AIDA LLANOS DE MORENO LUIS MANUEL MORENO LLANOS JULIO CESAR MORENO LLANOS SANDRA DEL CARMEN MORENO LLANOS ESTHER JULIA MORENO LLANOS	Corregimiento de Fenicia, vereda La Zulia.	ELN/FA RC.	Para el 5 de marzo de 1996, LUIS MANUEL MORENO LLANOS se desplazaba a caballo por el corregimiento de Salónica, cuando fue interceptado por dos hombres con armas de fuego de largo alcance, quienes le dijeron que estaba secuestrado por las FARC. MORENO fue movilizado hacía la parte alta del corregimiento, luego a Venecia, Trujillo, Andinápoles, La Zulia, permaneciendo en cautiverio durante dos meses, luego se fugo.	“La Oculta”, fue adquirido mediante EP. Nro. 290 del 23 de Noviembre de 1976 corrida en la Notaria Única del Circulo del Municipio de Riofrío, por compra que le hicieran los señores solicitantes al señor ANTONIO JOSÉ ORTIZ, inscrita en la anotación Nro. 007 del Folio de Matrícula Inmobiliaria Nro.384.15245 de la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Tuluá.	NO REGISTRA.	Para el 30 de julio de 2009, fue notificado el cobro coactivo administrativo o por concepto de impuesto predial unificado sobre el predio “La Oculta”, por lo adeudado por dicho concepto desde enero de 2005.	Ganando	Condiciones regulares.	Se encuentran refugiados con seres cercanos, en difíciles condiciones económicas.	Se presentaron en oferta al programa de Subsidio Integral de Tierras 2011, mediante proyecto C1-VAL-150, como resultado de la Convocatoria el proyecto fue rechazado en la fase I, siendo ello confirmado por el comité de reclamación por no cumplir con los requisitos exigidos.	catastral es de 120 Hectáreas 3.200 m2 y Registral es de 179 Hectáreas.

76-111-31-21-003-2013-00010-00	José Omar Viveros	“Región De Volcanes” Corregimiento de “SALONICA”	AUC	El predio del señor José Omar Viveros colindaba con un camino de herradura que se convirtió en un paso obligado para lugareños y grupos armados ilegales, estos últimos en una ocasión arribaron al predio del solicitante debidamente vestidos con prendas militares, brazaletes alusivos a las AUC y fuertemente armados, de los que se destacó como Comandante alias “El Costeño”, quien indagó a Viveros Jordán sobre la presencia y tránsito de grupos guerrilleros en la zona, y lo advirtió para que se marchara del predio en procura su seguridad, pues de no hacerlo debía asumir las consecuencias.	El Señor José Omar Viveros Jordán, adquirió el predio denominado “Tesorito” mediante compraventa celebrada con el señor Fernando Rincón, en el año 1998, a través de Escritura Pública Nro. 218 del 18 de diciembre de la Notaria Única de Riofrío (V).	no registra.	Reclamante y familia construyeron	Cultivos de café y plátano.	Sobre el predio pesa una prohibición no solo de explotación de tierras sino también de seguridad de los habitantes, pues, según inspección ocular llevada a cabo por la Corporación Autónoma es atravesado por varias quebradas.			NO
761113121002-2013-00004-00	ALBA NELBY VALLEJO CORREA	SALONICA A.	ELN	ELN- y se llevaron a la menor a la hija de la peticionaria y quien contaba para esa época con 16 años de edad, con el objetivo de alistarla en sus filas, pero ante la insistente búsqueda de la madre y los quebrantos que presentó la jovencita, fue devuelta a su hogar por un sujeto, al parecer del mismo grupo guerrillero, quien además le dijo a la señora ALBA NELBY que debía irse	Compras que hiciera el 19 de noviembre de 1987 a la señora MARÍA ROSMIRA VALENCIA GUTIÉRREZ de tres plazas y media por valor de \$ 215.000,00, y el 11 de febrero de 1988 a HERNEY DE JESÚS, y MARÍA OFFIR VALENCIA.	Bien pretendido hace parte de otro más grande, llamado la Alejandría, el cual es un bien baldío.	Hogar y cultivo.	Cultivos	No es viable adelantar actividades agropecuarias en el predio porque se halla en proceso de regeneración natural con el desarrollo del bosque. Zona Protegida	Recorrido por varias localidades, las ciudades de Cali, Dagua, Medellín y Tuluá donde actualmente vive porque no ha sido posible retornar.	Las víctimas se desplazan en distintas ocasiones debido a la violencia constante. No buscan restitución no sienten ningún apego, además de que ya no es cultivable.	3 ha. 5558 m

76 111 31 21 003 2013 00019 00	AIDA LLANOS DE MORENO	Corregimi ento SALONIC A.Vereda Volcanes.	ELN Y FARC.	Su hijo LUIS MANUEL MORENO LLANOS, fue víctima de secuestro, por un grupo de hombre armados, al parecer guerrilleros, quienes al sacarlo por la fuerza fue llevado con rumbo desconocido. Luego de dos meses de angustia y zozobra, su hijo pudo escapar de manos de los captores. Conyugue Sufre un atentado.	Titularidad del bien o sea el derecho real de dominio se encontraba en cabeza del señor Manuel Antonio moreno (q.e.p.d.), sobre la totalidad del inmueble, pues así se desprende de la matrícula inmobiliaria.	No registra.			Ganado, que tenían y el cual posteriormente también les fue hurtado.				320 Hectreas.
76 111 31 21 003 2013 00007 00	REINEL CARDON A.	Vereda El corosal, Corregimi ento portugal de piedras o RUBY	Paramili tares.	Asesinato de hijo de víctima, quien todavía estaba en el Colegio.	Compraventa al señor Luis Enrique Ibarra. Al momento de la transacción la víctima residía en Cali. Escritura Pública No. 607 del 12 de Marzo de 2007. Se constituyó una hipoteca por 6 millones, dinero excedente al momento de la transacción.	No registra.		El predio fue vendido a un allegado, el juzgado da validez a tal transacción por lo cual no hay lugar restitución jurídica del bien.	No registra.	Solicitante vive con su hijo en la ciudad de Cali, quien lo acogio después del abandono.	Solicitante reconoce legitimidad de transacción anterior, lo único que pide es una compensación.		

Cod.	solicitante	Ubicación	Grupo que ocasionó el despojo. Acción.	Tipo de violencia. Razón de abandono o despojo.	Adquisición Original del Bien.	fragmentación	Vínculo con predio. Físico y Jurídico.	Actividad económica al momento del abandono.	Condición actual del bien	Condición actual de víctimas.	Observaciones Adicionales	Hectáreas
------	-------------	-----------	--	---	--------------------------------	---------------	--	--	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------

76-111-31-21-002-2013-00024-00	GERMÁN RUIZ Y ELVIA RODRÍGUEZ RUIZ	Tres predios: Benavista, los Eucaliptos y el paraíso. Ubicado en la Vereda Aguas Lindas, Corregimiento Betania,	Paramilitares.	Extorsiones económicas, los homicidios de los hermanos Gerardo y Pedro Elías Ruíz Martínez y amenazas contra la vida e integridad física del solicitante GERMÁN RUÍZ MARTÍNEZ, que motivaron el abandono forzoso de los predios.	Predio EL PARAÍSO fue adquirido mediante compraventa en 1991. Predio LOS EUCALIPTOS adquirido por compraventa en 1995. Y predio BUENAVISTA adquirido de la misma forma en 2005.	No registra.	Casa, escrituras públicas	Cultivo de caña de azúcar, pasto, granadilla, lulo, mora y frijol, también para la explotación ganadera	Los predios tienen gravámenes hipotecarios	Deudas con el Banco Agrario y otras entidades financieras.	El Sr. German ejerció como concejal del municipio Bolívar hasta el año 2003.	Predio EL PARAÍSO: 10 ha. Predio LOS EUCALIPTOS: 3 Ha. Predio BUENAVISTA: 20 Ha.
76-111-31-21-002-2013-00041-00	NORBEO GAMBOA ALARCÓN	“MIRAFLORES. Ubicado en la Vereda Betania, Corregimiento Garrapatas	Paramilitares.	En 1985 asesinaron a su suegro, luego en 1993 tuvo que irse por los hechos violentos ocurridos en la vereda Santa, del Municipio de Bolívar Valle del Cauca. Regresó en 2001 y en 2004 ocurrió una masacre en el correjimiento de Santa Teresa. En 2007 ocurrió el homicidio de su hermano HENRY GAMBOA ALARCÓN.	División material de herederos mediante E.P. 12 Del 2 De Enero de 2008.	El predio hacía parte de uno de mayor extensión denominado "ALTO BONITO" que pertenecía a los padres del demandante	Casa de habitación y escritura pública	Un lago para la cría de peces, desarrollaba actividades avícolas – criaba gallinas-, sembraba plátano, maíz, yuca y cacao y tenía dos caballos	Corresponde a zona forestal protectora	Las víctimas actualmente viven en el municipio de Obando	Solicitante ha sido víctima de diferentes desplazamientos. Además de afectación en la salud gracias al glifosato.	2 Ha

7611131 21001 2012 00021 00	MERCEDES SALAZAR VÁSQUEZ	PREDIOS: La camelia, el Retiro, el paraíso, la esmeralda, las brisas, la Granada	ELN Y RASTROJOS	En el año 2003, el Ejército de Liberación Nacional ELN arribó a la región, por su parte "los rastros" se apoderaron de los predios especialmente de "La camelia" y "La granada". al predio "Las Brisas", e hicieron un campamento durante ocho días, y no le permitieron salir del predio a la solicitante y a su cónyuge durante ese periodo de tiempo.	Escritura Pública, en razón a compraventa.	Varios predios. Predio EL RETIRO se encuentra fragmentado.		Lo predios estaban destinados para el cultivo de yuca, plátano y maíz.	Los predios no tienen exactas las medidas de áreas, presentan traslapes con otras cédulas catastrales. Hacen parte de la reserva forestal.		desde el contenido mismo del formulario de inscripción, en el que se afirmó que en el año de 2003 militantes del ELN, hicieron un campamento por una semana en uno de los predios de la solicitante, periodo en el cual se vio junto con su familia impedida para abandonar el predio.	4 Hectareas + 25 Hectareas. 7 + hectareas y 6000 M2. Predio + 5 Hectareas. + 7 hectareas +: 4 hectareas. + 23 hectareas.
7611131 21001 2012 00009 00	Martín Fernando Marín Arboleda	los predios: El Hospital y la Marqueza	BACRIM. RASTROJOS Y LOS MACHOS	iniciaron el envío de mensajes extorsivos al solicitante y a su grupo familiar, razón por la cual el 18 de noviembre del mismo año denunció tales hechos ante la Fiscalía Sexta Especializada Antisecuestro y Extorsión del municipio de Tuluá.	Predio EL HOSPITAL fue adquirido por remate. E.P. 1384 del 08 de junio de 2001. Predio LA MARQUEZA a través de compraventa E.P. 856 del 01 de diciembre de 1986.	No registra	Vivienda construida.	Vivienda y Ganadería	señala que la seguridad de la zona ha mejorado por la presencia del ejército, pero el solicitante no tiene los recursos para hacer productivos nuevamente los predios		Señaló que desde los años 80s su familia fue víctima de amenazas y extorsiones, razón por la cual inició sus estudios fuera del departamento de Valle del Cauca, y tras el homicidio de su hermano mayor regresó para hacerse cargo de su familia, espacio temporal donde también fue víctima de constantes amenazas y extorsiones	Predio EL HOSPITAL: 256,3600 M2. Predio LA MARQUEZA: 46 Hectareas

76 111 31 21 003 2012 0016 00	Omar Pompilio Arenas	perímetro urbano de la Urbanización EL PORVENIR Municipio de Bolívar		Debido a los combates en la zona, la casa construida es derrumbada. Amenazas y asesinatos de vecinos, abandono definitivo 2004.	Poseedores del bien junto a familia, hace 27 años.	No registra		Cultivo de lulo y producción agraria. Con este fin en el año 2003 víctima adquiere un crédito de 5 millones. Después de primer abandono mantiene actos de señorío, con cultivos.	Debido a abandono se perdió todo. Se intentó vender bien, pero debido al conflicto fue imposible.		Decide ofrecer el predio como forma de pago al Banco, quien no lo acepta.	
7,61113 1210012 01+24	Rosalba Martínez Santamaría	Corregimiento de Betania	GRUPOS ARMADOS	El día 28 de diciembre de 2008, el hijo de la solicitante, FABIÁN SALAZAR MARTÍNEZ, recibió una llamada de una mujer, quien lo citó a las 11:00 P.M. para que se encontraran en el Municipio de El Dovío. Al cumplir la cita, en horas de la madrugada del 29 de diciembre de 2008, el joven fue asesinado,	Adquirió el predio por adjudicación en la sucesión de su padre, CARLOS OCTAVIO MARTINEZ, acto jurídico elevado a Escritura Publica N° 396 de noviembre de 2002	Objeto de Sucesión.		Agricultura.	El predio se encuentra abandonado y en muy malas condiciones para ser habitado, y se perdieron las cosechas.	El 14 de febrero de 2009, la solicitante y su hijo JOSE DANIEL SALAZAR MARTÍNEZ abandonaron el predio LA ESPERANZA y se desplazaron al municipio de Santiago de Cali		
76 111 31 21 001 2012 0029 00	Clara Gladys Carrillo y otro	Predios: LA ROSA y ALTOMIRA . Municipio de Trujillo.	ELN Y RASTROJOS	Muerto su padre en el año de 1987, personas ajenas a su grupo familiar, al parecer con alianzas con miembros del ELN, invadieron sin su consentimiento el predio objeto de restitución; quienes además la amenazaron de muerte si intentaba expulsarlos	Manifestó la solicitante que el predio "LA ROSA", antes denominado "LA CUMBRE", era propiedad de sus abuelos; luego pasó a manos de los hijos de éstos y, finalmente, tras sus padres adquirir los derechos sus tíos, le fue escriturado a finales de los años 80	Conforme al estudio de títulos que realizó la Superintendencia de Notariado y Registro, la finca "La Rosa" proviene del englobe de tres predios cuya tradición proviene de una falsa tradición.		una casa construida en bajareque, techo de zinc, piso en madera y dos habitaciones	En la propiedad, tenía cultivos de café, plátano, frijol, yuca, zanahoria y pasto; ganado			51 HA 8181 M2

7611131 2100120 12012 0013 00	Onar Pompilio Arenas Rojas	Predio EL BOSQUE	GRUPOS ARMADOS	Debido al temor generado por los hechos violentos en la zona, el solicitante y su núcleo familiar dejaron de habitar el bien inmueble, pero continuaron cultivándolo y visitándolo periódicamente. El día 7 de diciembre de 2004, el solicitante decidió abandonar definitivamente el predio	El solicitante adquirió en común y proindiviso el predio " LA ESPERANZA". En el año 2002, mediante Escritura Pública N° 150 del 6 de mayo de ese año, de la Notaría Única del Dovio,	No registra.	Casa	El predio lo tenía destinado para el cultivo de lulo y producción agraria era el sustento de su familia.	Como resultado del abandono y desplazamiento forzado se perdieron las cosechas, así como los elementos dejados en el bien inmueble.	se desplazó con su núcleo familiar al municipio de Roldanillo, donde vive actualmente.	El 31 de julio de 2002, el solicitante adquirió el crédito N° 151360 con el Banco Agrario, por valor de \$5.900.000, línea FINAGRO, con destinación a la plantación de lulo. Para garantizar la obligación crediticia, el predio fue gravado con hipoteca, mediante la Escritura Pública N° 1415 del 26 de agosto de 2002, de la Notaría de Roldanillo.	6800 M2
7611131 21001 2012 00014 00	María Procedes Trujillo Serna	Predio "LA PALMERIT A" corregimiento o EL NARANJAL	ELN	En el año 2000, uno de sus hijos salió a trabajar pero jamás regresó, siendo que a los 8 días tras salir en su búsqueda, ll guerrilleros encapuchados "le informaron que no buscara más, "que él ya está muerto y ni se le ocurra denunciar porque tendrá Consecuencias". En enero del 2008, "a guerrilla desapareció" al compañero permanente de una de sus hijas y, una semana después de este suceso, 4 hombres armados ingresaron a su casa y le advirtieron a su hija "que no buscara nada y que no	Mediante compraventa elevada a escritura pública N° 10 el 17 de enero de 2001, otorgada en la Notaría Única de Bolívar-Valle	No registra.	CASA	Tenía vocación agrícola y pecuaria, materializada con cultivos de café, plátano, mandarina, limón, guanábana, zapote y la tenencia de semovientes de los cuales, dependía su sustento.		Después de desplazamiento o se dirigen al municipio de Santiago de Cali donde viven actualmente, siendo que la solicitante pertenece a la tercera edad, sus recursos son escasos, no cuenta con posibilidades laborales y su salud se encuentra muy deteriorada		6400 M2

				denunciara nada".									
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Cuadro realizado por el Autor del presente trabajo de grado con base a (las sentencias de restitución de tierras de los municipios: El Dovio, Trujillo y Roldanillo).

Anexo3. Cuadro de Revisión de Noticias.

Título.	Abandono o Despojo.	Periódico	Fecha	Municipio o zona	Observaciones.
El Dovio y Sevilla están próximos a iniciar la restitución de tierras.	Abandono y Despojo.	http://elperiodicowebregion.blogspot.com/2013/08/el-dovio-y-sevilla-estan-proximos.html	08/05/2013.	Municipios de Sevilla y Dovio.	La Unidad de Restitución de Víctimas pide colaboración de la fuerza pública para el cumplimiento de su labor.
El despojo donde lo perdió todo	Despojo.	http://elperiodicowebregion.blogspot.com/2014/03/el-despojo-donde-lo-perdio-todo.html		Municipios de Riofrío.	Una familia de Riofrío, Valle del Cauca, hoy celebra la devolución de sus predios despojados hace 20 años por Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, principal victimario y condenado por la macabra masacre de Trujillo. El negocio jurídico que figura como celebrado en la notaría segunda de Buga, con escritura pública No. 2144 del 16 de agosto de 1994, entre 5 miembros de una misma familia y la sociedad Loaiza Díaz y Compañía S. EN C.S., o ganaderías Ache, representada por Henry Loaiza Ceballos, fue declarado inexistente y, por tanto, cancelado su registro.
Bolívar, un pueblo del Valle azotado por los violentos	Despojo	http://www.verdadabierta.com/1ucha-por-la-tierra/4966-bolivar-un-pueblo-del-valle-azotado-por-los-violentos		Bolívar.	En 1978, Mario* llegó a Bolívar y compró una parcela de dos hectáreas en el corregimiento de Guare y la cultivó durante trece años sin problema. Allí vivía tranquilo con su esposa y siete hijos hasta que un día, en 1991, se le presentó en la finca un hombre que decía ser Jesús Antonio Mejía Jaramillo. El hombre le mostró una escritura del 7 de abril de 1991 de la Notaría Única de Roldanillo en la que aseguraba que él era el propietario y no el campesino.
Fallan primera restitución de despojado por ‘El Alacrán’ en Valle	Abandono	http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5318-fallan-primera-restitucion-de-despojado-por-el-alacran-en-valle			Mario* trataba de asomarse a la finca cada vez que podía. Habían pasado veinte años desde que él y sus cuatro hermanos fueron despojados de las 99 hectáreas que sus padres les heredaron en el corregimiento de Fenicia, municipio de Riofrío, en el centro del Valle del Cauca. Sin embargo, su regreso definitivo comenzó a gestarse en marzo pasado, cuando el Juzgado Segundo Civil de Restitución de Tierras de Buga determinó que fueron víctimas de Henry Loaiza Ceballos, alias ‘El Alacrán’ , un ex integrante del Cartel de Cali que fue condenado por la masacre de Trujillo y quien purga una pena de 30 años.
Un nonagenario regresará a sus tierras, gracias a un fallo a su favor.	Despojo.	http://elperiodicowebregion.blogspot.com/2013/09/un-nonagenario-regresara-sus-tierras.html	23/052013	Municipio de Bolívar.	El predio La Garantía fue comprado en 1978, trece años después apareció otro dueño reclamando el 50% de la finca, apoderándose de lo que allí se cultivaba y exigiendo el abandono del mismo a quienes habían sido sus dueños. El propietario hoy en día tiene 94 años de edad y muchas fuerzas para seguir trabajando su tierra. Gracias a los buenos oficios de la Unidad de Restitución de Tierras, la víctima obtuvo un fallo a su favor en tan sólo 4 meses. pool de juristas al servicio del clan Urdinola Henao. Actualmente el predio está siendo administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y no por el victimario, quien teniendo 54 años de edad fue asesinado el 19 de mayo de 2004, en el barrio Centenario de Cali. Sentencia No. 002 del 30 de agosto de 2013, ordenó la restitución del predio al solicitante

Buga inició socialización para restitución de tierras	Despojo y Abandono.	http://elperiodicowebbuga.blogspot.com/2013/06/buga-inicio-socializacion-para.html	6.11.2013	Municipio de Guadalajara. veredas como Alaska, La Habana, La María, Monterrey, La Piscina y La Primavera.	Al momento hay 18 solicitudes de la zona microfocalizada: 15 en La Habana, 1 en La María, 1 Monterrey y 1 en Miraflores. Las víctimas de despojo y abandono forzado del municipio de Guadalajara de Buga, ya pueden hacer su solicitud para restitución de tierras en la sede de la Unidad territorial del Valle del Cauca, ubicada en el municipio de Cali. La microfocalización del municipio permitió que la Unidad iniciara la etapa administrativa para la devolución o compensación de predios a los solicitantes que fueron desplazados o que debieron abandonar sus tierras en esta zona del país, donde la violencia imperó a lo largo de varios años.
Sevillanos despojados también tendrán restitución de tierras	Despojo.	http://elpueblo.com.co/sevillanos-despojados-tambien-tendran-restitucion-de-tierras/	2/08/2013	Municipio Sevilla y los corregimientos de El Manzanillo, Morro Azul, La Melva, Purnio, Coloradas, San Antonio y sus centro poblados.	Los anteriores corregimientos, entre 1990 y 2000, sufrieron la incursión de las Farc, el ELN, Movimiento Batemán Cayón y erg, grupos guerrilleros que dejaron una ola de violencia y ataques a la población. Posteriormente, con el arribo del Bloque Calima de las auca esta cordillera, para disputarles el territorio a los guerrilleros, comenzaron las masacres; como la ocurrida el 18 de julio del año 2000 contra 7 campesinos que habitaban en la vereda Maúlen, hecho que provocó el desplazamiento masivo de la población.
Bolívar, un pueblo del Valle azotado por los violentos	Despojo	http://elpueblo.com.co/bolivar-un-pueblo-del-valle-azotado-por-los-violentos/	12/10/2013	Municipio de Bolívar. corregimientos de : La Tulia, Naranjal y Betania	Este municipio en el norte del Valle del Cauca es el segundo del departamento con más reclamantes de tierras. Las seis sentencias por ahora falladas muestran el drama de la guerra. Los corregimientos más afectados por el conflicto armado fueron La Tulia, Naranjal y Betania, donde precisamente los jueces han fallado a favor de las víctimas. Según datos de la Unidad de Restitución, actualizados al 31 de mayo de 2013, a este municipio el Gobierno le dio prioridad para documentar los casos de abondo y despojo de tierras, y se presentaron ante jueces por la cantidad de personas que están reclamando tierras. Hasta esa fecha, 73 familias habían solicitado la restitución de 69 predios, que suman 4.200 hectáreas que les fueron arrebatos con violencia. La violencia en Bolívar comenzó en los años ochenta, cuando en el territorio montañoso se empezó a cultivar la hoja de coca. La Unidad de Restitución documentó que en esa época se registraron los primeros asesinatos y las primeras ventas ilegales de tierras en lugares estratégicos como el Cañón de Garrapatas y San Quintín. La guerrilla del M-19 también hacía presencia en la zona. Luego vinieron los desplazamientos después de los primeros combates entre el Ejército y dicha guerrilla, y las primeras fumigaciones contra las plantaciones de cultivos ilícitos.
Avanza proceso de restitución de tierras en Trujillo, Valle del Cauca	Despojo.	http://elpueblo.com.co/avanza-proceso-de-restitucion-de-tierras-en-trujillo-valle-del-cauca/	31/07/2013	Municipio de Trujillo.	En la vereda Chuscales del municipio de Trujillo, al norte del Valle del Cauca, se inició un proceso de restitución de tierras, que espera devolver a las familias afectadas, sus territorios y la tranquilidad en la zona. Esta jornada, que fue acompañada por la Fuerza Pública y ha recibido el apoyo y la solidaridad de la población frente al posible retorno de las víctimas a sus tierras, busca avanzar con la restitución. Ocho predios más ya fueron visitados en las veredas La Sonora y Venecia, recolectando las pruebas técnicas que se aportarán en las demandas durante la etapa judicial.
Las masacres que desplazaron	Despojo.	http://elpueblo.com.co/las-masacres-que-desplazaron-a-	31/08/2013	Trujillo y Buga.	La historia de Trujillo y Buga de está atravesada por masacres. Los relatos de los campesinos a la Unidad de Restitución de Tierras, a la espera que un juez

a dos pueblos del Valle del Cauca		dos-pueblos-del-valle-del-cauca/			les dé la razón y ordene la devolución de las parcelas que abandonaron por la violencia, coinciden en que primero fueron víctimas de los narcotraficantes, luego de miembros de la Fuerza Pública, después de la guerrilla y al poco tiempo de los paramilitares.
BUENAVENTURA:					
Preocupación por crisis humanitaria en Buenaventura.	Abandono.	http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/preocupacion-por-crisis-humanitaria-buenaventura	29/10/2013	Buenaventura.	La situación en el Pacífico, y específicamente en el puerto de Buenaventura, es muy grave. Hay exclusión de la población afrodescendiente, aumento del despojo de tierras a causa de la minería ilegal, aumento en la actividad de los grupos armados al margen de la ley y una falta de protección a las tierras de los afrodescendientes
Subcomité Departamental de Restitución de Tierras fortalece cumplimiento de fallos judiciales	11/25/2013.	http://elperiodicowebregion.blogspot.com/2013/11/subcomite-departamental-de-restitucion.html	11.25.2013	Cali, Buga, Tuluá, Jamundí y El Dovio	La Unidad de Restitución de Tierras, territorial Valle del Cauca, convocó al primer subcomité departamental a todas las entidades responsables del cumplimiento de las órdenes judiciales de las sentencias proferidas a la fecha en el departamento del Valle, con el fin de hacer el monitoreo y la articulación interinstitucional para la efectiva reparación de las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras. La respuesta institucional fue positiva, ya que asistieron alrededor de 42 personas de las entidades con competencia en el cumplimiento de fallos de la Ley 1448 de 2011, entre ellas la Unidad de Víctimas, Policía DEVAL, Procuraduría, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Superintendencia de Notariado y Registro, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro Nacional de Memoria Histórica; representantes de la Gobernación del Valle y de los municipios de Cali, Buga, Tuluá, Jamundí y El Dovio, así como la Registradora de Instrumentos Públicos de Roldanillo.
Superintendencia denuncia casos de despojos de tierras en el Valle del Cauca	Despojo.	http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/superintendencia-denuncia-casos-despojos-tierras-valle-cauca	10/04/2012	El Parque Los Farallones	El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, anunció que investigan la apropiación ilegal de tierras en Florida y Buenaventura por parte como grupos armados irregulares como Farc y paramilitares, respectivamente. Igualmente trabajan en la recuperación de terrenos del Parque Los Farallones de Cali , los cuales están en manos de particulares.
Efectivo retorno a casa	Despojo y abandono.	http://elpueblo.com.co/efectivo-retorno-a-casa/	28/09/2103.	vereda Tres Esquina. Buga. Puerto Frazadas, zona rural de Tuluá	El municipio donde más sentencias a favor han fallado, que la Unidad ya está restituyendo es Tuluá, en su zona rural, en el corregimiento de Frazadas, también en Trujillo. Además, han salido sentencias en los municipios de Bolívar, Riofrío y en Cali.
Inician reparación a víctimas con bienes de narcos.	Despojo y Abandono.	http://elpueblo.com.co/inician-reparacion-a-victimas-con-bienes-de-narcos/	26 de Octubre	Cali y Riofrío.	La hacienda La Gloria, que en el pasado fue símbolo del poder del narcotraficante Héctor Mario Urdinola, alias El Zarco, se convirtió en el futuro de dos familias víctimas del conflicto armado en Valle del Cauca, cuando la Unidad de Restitución de Tierras les entregó los títulos que los acreditan como nuevos propietarios.

Se creará Comisión de la Verdad para caso de Los Farallones y otros bienes en Cali	Despojo	http://elpueblo.com.co/se-creara-comision-de-la-verdad-para-aclarar-caso-de-los-farallones-y-otros-bienes-en-cali/	21/06/2013.	Cali.	Luego de la denuncia del Gobierno Nacional sobre la pérdida de 9.900 hectáreas de la reserva natural Parque de los Farallones, el Concejo Municipal propuso la creación de una Comisión de la Verdad a nivel local para aclarar todo lo relacionado con estos Ejidos y otros bienes ocultos en Cali.
--	---------	---	-------------	-------	--

Fuente: Tabla Elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base a diferentes (fuentes periodísticas nacionales y regionales).